



CICLO DE FOROS POR LA PAZ EN COLOMBIA

...

SERIE DER FOREN FÜR DEN FRIEDEN IN KOLUMBIEN

John Zuluaga / Sophie Rähme

.....



Informe
Ciclo de foros por la paz en Colombia
Tagungsbericht
Serie der Foren für den Frieden in Kolumbien

John Zuluaga / Sophie Rähme



© John Zuluaga, 2017
Sophie Rähme, 2017

Hecho el depósito que exige la ley.
Impreso en Rocco Gráficas
Calle 42 No. 68 – 38, Medellín – Colombia
www.roccograficas.com

ISBN: 978-958-48-0712-0

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, por medio de cualquier proceso, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Informe

Ciclo de foros por la paz en Colombia

Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia), Semestre 2016/2

Contenido

Presentación CEDPAL	6
Presentación del Instituto de Filosofía-UdeA	7
Prólogo de los Autores	8
Lista de siglas y abreviaturas	9
Introducción	11
1. El plebiscito y la constitucionalidad de la justicia transicional (1.09.2016)	13
1.1. Reconciliación y verdad. A propósito del plebiscito y la justicia transicional	13
1.2. La construcción política del miedo y del odio: Reflexiones sociopolíticas sobre el plebiscito por la paz	14
1.3. El plebiscito por la paz	15
1.4. Guerra, derecho y paz.....	16
1.5. El Acuerdo Gobierno – FARC-EP sobre búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado.....	17
1.6. Paz o terminación del conflicto ¿qué apoyamos?	18
1.7. Resumen del primer foro	19
2. Perspectivas de la Justicia Transicional en Colombia (05.10.2016)	20
2.1. La justicia transicional y la recuperación de la cultura política en Colombia.....	20
2.2. Justicia transicional entre negociación política y constitucionalidad: ¿Cuánta democracia y cuánta justicia necesita la justicia transicional?	21
2.4. La necesidad del consenso luego del plebiscito. Entre el discurso homogéneo y exclusivo y el discurso del repudio.....	22
2.5. Condiciones de la justicia transicional en Colombia	24
2.6. Resumen del segundo foro	24
3. Dilemas de la justicia penal en el proceso de paz en Colombia (01.12.2016)	26
3.1. Justicia transicional en Colombia. ¿un modelo para la continuidad?	26
3.2. Transformaciones y continuidades del sistema penal colombiano en su desarrollo histórico	27
3.3. El rol de la moral en el conflicto colombiano y en el actual proceso de paz: justicia, verdad, reparación y no repetición	28
3.4. La justicia transicional punitiva y el pensamiento de la venganza	29
3.5. Resumen del tercer foro	30
4. Conclusiones generales sobre el ciclo de foros por la paz en Colombia	31
Los Autores	33

Presentación CEDPAL

El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) es una entidad autónoma del Instituto de Ciencias Criminales de la Facultad de Derecho de la Universidad Georg-August de Göttingen y parte integrante del Departamento para Derecho Penal Extranjero e Internacional. Fue fundado por la resolución del Rectorado de la Universidad de fecha 10 de diciembre de 2013 con base en la decisión del Consejo de la Facultad de Derecho de fecha 6 de noviembre de 2013. Su objetivo es promover la investigación en ciencias penales y criminológicas en América Latina y fomentar, a través de diferentes modalidades de oferta académica, la enseñanza y capacitación en estas áreas. El Centro está integrado por una Dirección, una Secretaría Ejecutiva y un Consejo Científico, así como por investigadores adscriptos y externos (más información en: <http://cedpal.uni-goettingen.de>).

Una de las actividades principales del CEDPAL es la promoción y desarrollo de actividades de extensión académica. En este pequeño escrito presentamos el informe del “ciclo de foros por la paz en Colombia”, organizado por el Instituto de Filosofía (Grupo de Investigación de Filosofía Política) y la Rectoría de la Universidad de Antioquia, con el respaldo del CEDPAL. En este ciclo se llevaron a cabo tres de foros por la paz, por medio de los cuales se construyó un espacio académico para propiciar una amplia discusión sobre temas fundamentales relacionados con el proceso de paz, el posconflicto y la consolidación de la paz en Colombia. El escrito aquí presentado compila la síntesis de cada una de las presentaciones durante todo el ciclo de foros. La edición bilingüe del informe en español y alemán intenta no solo informar a todos los lectores hispanohablantes sobre los desarrollos del proceso de paz colombiano, sino, además, busca incentivar una más profunda relación científica entre Colombia y Alemania y articular una mejor cooperación académica entorno a los temas propios de la justicia transicional y estudios de paz.

Deseamos agradecer en este lugar a todos quienes han hecho posible la publicación de esta obra y la realización del ciclo de foros por la paz. Por un lado, la Rectoría y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, por la contribución en la organización de cada uno de los eventos. Por otro lado, a John Zuluaga y Sophie Rähme por la edición bilingüe. Finalmente, a cada uno de los conferencistas que participaron en los tres foros por su disposición y cooperación en la construcción de este espacio de reflexión académico.

Kai Ambos
Director General
Göttingen, febrero de 2017

Presentación del Instituto de Filosofía-UdeA

El Instituto de filosofía es una unidad académica que se creó en 1988 y ha constituido la investigación filosófica en tarea prioritaria. Esta misión se realiza a partir de proyectos de investigación de carácter individual o a través de proyectos que se desarrollan al interior de los grupos de investigación, bien sea en filosofía, en la enseñanza de la filosofía, o en su relación interdisciplinar. Las actividades de extensión que se desarrollan en el marco del trabajo académico del Instituto, se enfocan a la divulgación del quehacer de profesores y estudiantes en sus ámbitos docentes e investigativos.

El ciclo de foros realizado durante el segundo semestre responde a una iniciativa tomada dentro del Grupo de Investigación en Filosofía Política, concretamente en su área de justicia transicional. Esta iniciativa dio cuenta de la necesidad de fomentar procesos de educación política, de comprensión de los acuerdos logrados en las negociaciones de La Habana, de dilucidación del significado político del plebiscito y de la construcción de paz en Colombia. Esto llevo a impulsar un proceso de reflexión pública con la comunidad universitaria, no sólo sobre la diversidad de posiciones y puntos de vista frente a los procesos de negociación, sino, también, acerca de las actividades que como sector de la sociedad civil le compete adelantar a la Universidad pública. Si bien es claro que la Universidad no actúa o incide directamente en las negociaciones, el papel que juega como formador de opinión pública y receptor de algunas dinámicas del posconflicto como las relativas a la implementación de los acuerdos, resultan vitales. En este sentido, el ciclo de foros representó un escenario ideal para discutir públicamente sobre las comprensiones ciudadanas, políticas, filosóficas y jurídicas entorno al proceso de paz colombiano.

Agradecemos a todos los que se vincularon a la realización de cada uno de los foros. Especialmente a cada uno de los conferencistas que hicieron posible cada debate y la discusión de las múltiples problemáticas vinculadas a la transición del conflicto armado y la construcción de paz en Colombia.

Francisco Cortés
Director
Instituto de Filosofía
Universidad de Antioquia

Prólogo de los Autores

Con el anuncio de un acuerdo de paz integral y definitivo se puso fin al conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC-EP)¹. Después de una guerra de más de 50 años, en el acuerdo se definieron las condiciones para la terminación del conflicto armado en Colombia y la construcción de una paz estable y duradera. El cierre de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP representa una oportunidad para reconstruir y reparar los daños que ha dejado la violencia vinculada al conflicto armado. Con el propósito de discutir estos avances, pero, también, los retos que implican, el Instituto de Filosofía y la Rectoría de la Universidad de Antioquia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal (CEDPAL) de la Georg-August-Universität Göttingen, promovieron la realización de un ciclo de foros por la paz durante el segundo semestre académico del año 2016. Por medio de estos foros y bajo el prisma de la interdisciplinariedad, se discutieron temáticas esenciales vinculadas a los desarrollos del proceso de paz en Colombia de forma previa y posterior al plebiscito del 2 de octubre de 2016, fecha que marco un nuevo desenlace del Acuerdo de paz y del trámite legislativo para la implementación del mismo. De esta manera, se ofreció una reflexión histórica de procesos político-sociales y transicionales desde la perspectiva filosófica, histórica, jurídica y política.

Agradecemos a todos los que han hecho posible la realización de los respectivos foros. Especial agradecimiento rendimos a todos los que intervinieron en cada uno de los foros. Entre ellos Ana María Londoño, Rafael Nieto Loaiza, Armando Luís Calle Calderón, Beatriz Restrepo Gallego, Bernardita Pérez Restrepo, Darío Acevedo Carmona, Francisco Cortés Rodas, Gabriel Ignacio Gómez, Gloria María Gallego, Jorge Giraldo, Julio González Zapata, Miguel Humberto Jaime, William Fredy Pérez.

John Zuluaga
Sophie Rähme

Medellín, febrero de 2017

¹ El acuerdo puede consultarse íntegramente en http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf (visto por última vez el 20.02.2017)

Lista de siglas y abreviaturas

AL	Acto Legislativo
arts.	Artículos
CC	Corte Constitucional -Colombia-
cfr.	Confróntese, compárese, véase
CLH	Crímenes de Lesa Humanidad
coord.	Coordinador
CVR	Comisión (o Comisiones) de Verdad y Reconciliación (ver también: TRC)
DD.HH.	Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional Humanitario
eds.	Editores
et. al.	Y otros
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
FGN	Fiscalía General de la Nación
GAOML	Grupo(s) Armado(s) Organizado(s) al Margen de la Ley
Ibíd	Ibidem: en el mismo lugar
ICTJ	International Centre for Transitional Justice
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz
JTr	Justicia Transicional
LJP	Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
MJP	Marco Jurídico para la Paz
M.P.	Magistrado Ponente
nm.	Número/s marginal/es
No.	Número
Num.	Numeral
ONU	Organización de las Naciones Unidas
p.	Página
párr.	Párrafo(s)
para.	parágrafo(s)
pp.	Páginas
Rad.	Radicado
Res.	Resolución
s.	siguiente
ss.	Siguientes
SIVJRNR	Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
vol.	Volumen
UdeA	Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia)
ZIS	Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (revista jurídica alemana)
	< www.zis-online.com >

Informe

Ciclo de foros por la paz en Colombia

Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia), Semestre 2016/2

John Zuluaga

Introducción

El Ciclo de foros por la paz se desarrolló en tres sesiones en las que se abordaron específicamente los siguientes temas: 1. El plebiscito y la constitucionalidad de la justicia transicional; 2. Perspectivas de la justicia transicional en Colombia; 3. Los dilemas de la justicia penal en el proceso de paz colombiano. Con esta serie de discusiones se logró una comprensión amplia y detallada de los acuerdos logrados en las negociaciones de La Habana (Cuba) entre el gobierno colombiano y las FARC-EP y se pudieron delimitar los retos más importantes para la construcción de paz en Colombia.

En el primer foro se analizó *el plebiscito y la constitucionalidad de la justicia transicional en Colombia*. La refrendación plebiscitaria del acuerdo final fue avalada por la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-379 de 2016². En esta sentencia, la Corte no solo aclaró el nivel vinculatorio de la decisión plebiscitaria frente al Presidente de la República, sino que, también, profundizó su doctrina sobre la constitucionalidad de la justicia transicional en Colombia³. En esa medida, además, estableció la dimensión funcional de la Justicia transicional frente al logro de una paz estable y duradera y fijó criterios para la comprensión de la legitimación democrática de la justicia transicional⁴.

En el segundo foro, se discutió sobre las *perspectivas de la justicia transicional en Colombia* después de la refrendación plebiscitaria y sus efectos en la realización del modelo de justicia transicional colombiano. La refrendación plebiscitaria representó un momento definitorio de los destinos de la justicia transicional en Colombia. Por un lado, dio cuenta del nivel de aprobación democrática de los mecanismos judiciales y no judiciales para superación del conflicto armado en Colombia. Por otro lado, determinó el inicio de renegociaciones con la oposición política y, posteriormente, el trámite legislativo que puso en marcha la implementación de los acuerdos logrados en la Habana (Cuba)⁵. En este foro se visibilizaron los retos de la justicia transicional post-plebiscito y se profundizó en el análisis de la implementación del acuerdo de paz y su proyecto de justicia transicional.

² Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 2016 del 18.07.2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

³ CC, *supra* nota 2, Sección Consideraciones de la Corte.

⁴ CC, *supra* nota 2, párr. 13.5 ss., 113.1 ss.

⁵ Como fruto del proceso de implementación se ha promulgado hasta la fecha (20.02.2017) la Ley 1820 del 30.12.2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

En el tercer foro, se debatió sobre los dilemas de la justicia penal en el proceso de paz colombiano. Concretamente se discutió sobre la llamada *jurisdicción especial para la paz*, por medio de la cual se instauró un modelo de justicia que se aplicará a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano⁶. Esta jurisdicción se concibió junto a otros mecanismos y medidas dirigidos a componer el llamado *Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición*⁷. El acuerdo sintetizó un marcado uso de la pena y del derecho penal como medidas de transición, como una de las condiciones para la consolidación de la paz en Colombia.

Los diferentes aportes que se resumen en el siguiente informe, ofrecieron un amplio panorama sobre los múltiples puntos de vista que existen en Colombia entorno al proceso de paz, especialmente con las FARC-EP. Por un lado, como reacciones político-sociales e interpretaciones académicas, dichos aportes prestaron un servicio de gran consideración para la comprensión del proceso de terminación del conflicto armado por medio de la justicia transicional. Por otro lado, dejaron constancia íntegra de las diferentes razones que se recrean en el discurso social y político que actualmente divide a la sociedad colombiana. En esa medida, el ciclo de foros por la paz institucionalizó un espacio interdisciplinario en el que pudieron encontrarse diversas voces y puntos de vista respecto del proceso de paz y la justicia transicional en Colombia⁸.

⁶ Al respecto Zuluaga, John, “De la jurisdicción especial para la paz”, en *Revista Debates* N. 73 (ENE-ABR 2016), Medellín, UdeA, pp. 65-69; el mismo, “Hacia una tercera generación de justicia transicional. De la Jurisdicción especial para la solución del conflicto armado en Colombia”, en *En Letra: Derecho Penal*, Año I I, número 3 (2016), Argentina, pp. 7-12.

⁷ Cada uno de los foros puede verse en <http://original.livestream.com/universidadantioquia> (visto por última vez el 14.02.2017).

⁸ El ciclo de foros antecedió la realización del simposio internacional “Justicia transicional y Derecho penal internacional”, previsto para los días 8, 9 y 10 de marzo de 2017 a realizarse en la UdeA. Este simposio fue organizado por el Instituto de Filosofía de la UdeA y el CEPDAL, contando además con el apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt y el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

1. El plebiscito y la constitucionalidad de la justicia transicional (1.09.2016)

Los puntos centrales del primer foro por la paz se desarrollaron por medio de seis conferencias, en las cuales se discutió sobre lo que deberían saber los ciudadanos respecto al plebiscito que tuvo lugar el 2 de octubre de 2016 y la constitucionalidad del modelo de justicia transicional colombiano delimitada por la Corte Constitucional en la sentencia C-379 de 2016.

1.1. Reconciliación y verdad. A propósito del plebiscito y la justicia transicional

*Miguel Humberto Jaime*⁹ inició reconociendo la importancia del foro en medio de la alta perturbación política, la desinformación y las permanentes estrategias de alteración de la verdad que afectan la formación de opinión pública en Colombia. Su presentación sirvió, por un lado, para reflexionar sobre la reconciliación y la verdad, valores que según el ponente están dramáticamente ausentes en la cultura política colombiana. Por otro lado, hizo alusión a la elección de los jueces de la JEP intentando mostrar la importancia que tiene su designación en el proceso de generación de confianza entre los diferentes sectores sociales y políticos. Finalmente, expuso una serie de argumentos para contradecir aquella opinión según la cual la JEP representa un esquema de impunidad y para sostener la tesis de que las penas acordadas constituyen sanciones efectivas.

Según *Jaime*, la verdad y la justicia retributiva se hayan en una relación directa pero inversamente proporcional, esto es, a mayor severidad del castigo retributivo menos verdad se llega a obtener. Esto es algo que, desde su punto de vista, debería replantearse teniendo en cuenta el conflicto armado interno que ha vivido Colombia. Atendiendo a la naturaleza política del conflicto, *Jaime* consideró que es posible consensuar soluciones que difícilmente podrían hacerse con organizaciones delictivas comunes, es decir, que se orientan por el derecho penal ordinario. En esa medida, la opción de una solución militar al conflicto armado no representa una disyuntiva absoluta, sino que, más allá de eso, debe ponderarse la posibilidad de terminar el conflicto interno por medio de un acuerdo de paz. El mismo es siempre un escenario que podría ofrecer más réditos éticos y políticos que la eliminación del enemigo.

Respecto a la sentencia C-379 de 2016, *Jaime* asignó al plebiscito un efecto normativo respecto a la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. No solo porque del resultado del mismo dependía la puesta en marcha del AL 01 de 2016¹⁰, sino, además, porque el mismo es el parámetro que define la legitimidad política de lo acordado entre el gobierno y las FARC-EP. Para *Jaime*, independientemente del resultado del plebiscito, las diferencias políticas en Colombia permanecerán. Por ello, es necesario caracterizar adecuadamente la reconciliación no como la ausencia de diversidad de opiniones, sino en que por medio del ejercicio de intercambio u

⁹ Abogado de la UdeA; especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín; Magister en Filosofía de la Universidad del Valle; Magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal.

¹⁰ Una versión integral del texto puede verse en <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%2001%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202016.pdf> (visto por última vez el 20.02.2017).

oposición de puntos de vista no se torne necesario emplear la violencia para resolver las controversias o eliminar al contradictor.

Respecto a las sanciones previstas por el sistema de justicia penal incorporado en el acuerdo de paz, *Jaime* advirtió que es necesario considerar que hay delitos que por los compromisos internacionales que asumió Colombia no pueden ser amnistiados. Por estos delitos deberán ser investigados, juzgados y sancionados los integrantes de las FARC. Sin embargo, es fundamental insistir en la comprensión del “otro”, el “oponente”, para avanzar en una negociación. En esto consiste, según él, la puesta en marcha de una negociación política. Para *Jaime*, la escasa severidad de las sanciones adoptadas en el acuerdo final para reprimir estos delitos se relacionan directamente con el reconocimiento de la verdad. Esto se evidencia en que la ausencia de sanciones de restricción de la libertad en centro penitenciario y la imposición de sanciones restrictivas de la libertad orientadas a la reparación, se reservan para quienes desde un primer momento dicen la verdad de manera completa y detallada.

1.2. La construcción política del miedo y del odio: Reflexiones sociopolíticas sobre el plebiscito por la paz

*Gabriel Ignacio Gómez*¹¹ discutió sobre el contexto que rodea los debates relacionados con el proceso de paz. En el fondo trató de establecer las coordenadas sociopolíticas dentro de las cuales se podía dar un significado más amplio y crítico al denominado *plebiscito por la paz*. A esos efectos, se concentró en los siguientes aspectos: 1) la construcción política del miedo y del odio y 2) el proceso de paz, la polarización política y la oposición política oportunista.

Para *Gómez*, el miedo tiene múltiples usos políticos. El mismo ha servido para legitimar atrocidades, perseguir opositores, controlar poblaciones y territorios. En su perspectiva, la construcción política del miedo hacia el otro (diferente) y la configuración de enemigos absolutos que es necesario destruir, se constituye en una estrategia que permite múltiples beneficios para quien las promueve, lo cual requiere, también, de unas prácticas y tecnologías para tal elaboración discursiva. Según *Gómez*, la construcción de miedo ha sido una estrategia permanente en Colombia, pero especialmente en la última década por parte del partido de oposición al gobierno del Presidente Santos¹². Esta estrategia se ha canalizado en la oposición al proceso de paz. *Gómez* afirmó que los postulados de esta oposición muestran cierta continuidad en la construcción del “miedo” frente a aquello que no coincida con su agenda política, y en una lectura de lo político como la relación entre amigo-enemigo. En tal sentido, la contradicción al gobierno se ha concretado de doble forma: oposición al gobierno y oposición al proceso de paz.

¹¹ Magíster en Instituciones Jurídicas por la Universidad de Wisconsin-Madison y doctor en Estudios de Justicia por la Universidad Estatal de Arizona. Profesor asociado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA e investigador del Grupo Derecho y Sociedad, adscrito a la misma Universidad.

¹² La oposición al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos tiene en el partido político “Centro Democrático” a uno de sus principales representantes. El Centro Democrático es un partido político fundado en 2013 por el ex-presidente Álvaro Uribe. En su conformación inicial, dicho partido reunió a partidarios del Uribismo, así como varios disidentes del Partido Conservador y el Partido de la Unidad Nacional.

Respecto a la forma en la que canalizan esa estrategia de construcción de miedo como forma de oposición al proceso de paz, se afirmó que los opositores políticos al gobierno no aceptan ni la posibilidad de mirar históricamente el conflicto colombiano, ni de validar una salida diferente a la victoria militar y, en consecuencia, a una rendición incondicional de las FARC. Para *Gómez*, esta estrategia no solo contribuye muy poco a la transformación del conflicto armado en Colombia, sino, además, genera una confusión innecesaria de acuerdo con la cual la aceptación de los acuerdos equivale a aprobar la gestión general del gobierno Santos, o incluso a premiar a las FARC.

Más allá de su crítica, *Gómez* consideró que hay que reconocer la existencia de preocupaciones legítimas por parte de quienes discrepan con algunos puntos del acuerdo final. Entre otros aspectos, uno ampliamente debatido es el punto 5 sobre Víctimas del Conflicto Armado, particularmente frente a la renuencia de las FARC a aceptar penas privativas de la libertad. Para *Gómez*, la opción de rechazar el Acuerdo Final por el hecho de no haber un componente retributivo fuerte, pone en riesgo la salida negociada del conflicto armado y sería una irresponsabilidad histórica frente a la sociedad colombiana; frente a las víctimas, ya no solo actuales, sino también futuras.

1.3. El plebiscito por la paz

*Bernardita Pérez*¹³ recordó que la Constitución política de Colombia alcanzó 25 años después de su promulgación y en ese contexto se refirió al plebiscito y sus rendimientos en comparación a otros mecanismos de participación ciudadana previstos por la Constitución, concretamente el referendo. *Pérez* discutió sobre dos preguntas fundamentales: ¿Por qué y para qué el plebiscito? Desde su punto de vista no es el mecanismo de mayor dignidad en la teoría política y se vincula más a poderes autoritarios o dictatoriales. Recordó que en Colombia se celebró un plebiscito en el año 1957, el cual llevó incluso a la clandestinización del partido comunista existente para esa época.

Pérez aclaró, primero, que el plebiscito se llevaría a cabo porque fue definido en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC-EP como el mecanismo de refrendación ciudadana del acuerdo, es decir, para otorgar legitimidad democrática al acuerdo de paz. En la sentencia de la Corte Constitucional se determinó no solo la vinculatoriedad democrática de la decisión plebiscitaria frente al Presidente de Colombia, sino que se profundizó sobre la doctrina de la constitucionalidad de la justicia transicional. Según la interpretación de *Pérez*, la Constitución no aclara la forma en que concretamente se alcanza la paz, en tanto la misma no es normativamente regulable. Sin embargo, se prevén mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito y el referendo. A pesar de ello, estos mecanismos no pueden brindar una ratificación del acuerdo en sentido amplio, en tanto se requiere para ello una pluralidad de voces y actores políticos. A pesar de ello, llegó a emplearse porque su utilización es menos compleja y, de igual manera, es

¹³ Abogada de la UdeA, especialista en Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha (España); Magister en Filosofía Política de la UdeA; Ha sido consultora del Consejo Superior de la Judicatura en Tutela. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho de esta Universidad y directora de la Especialización en Derecho Constitucional de la UdeA; conjuce de la Corte Constitucional, del Tribunal Superior de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia.

vinculatorio para que las decisiones ejecutivas del Presidente logren mayor legitimidad democrática.

Adicionalmente, el plebiscito no entra a discutir sobre la paz, sino sobre la versión final del acuerdo de paz. Es imposible discutir sobre la paz en tanto la misma está consagrada en la Constitución colombiana como un derecho fundamental, sobre lo cual las mayorías no pueden disponer. El plebiscito, en su significado político y simbólico, no representa la paz, pero promueve el desarrollo de determinados procesos sociales y políticos con el fin de lograr una paz estable y duradera. Pérez resumió diciendo que el plebiscito es un acto para la totalidad de la población colombiana. Más allá de eso, el mismo pone a consideración de los ciudadanos un acuerdo que es el único logrado en la historia republicana de Colombia desde 1991. Este acuerdo no solo ofrece la posibilidad de amnistiar algunos hechos punibles, sino, más allá de eso, promete la realización de garantías para las víctimas como la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

1.4. Guerra, derecho y paz

Para *Francisco Cortés*¹⁴ en el acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP se definen las condiciones mínimas de una paz por medio del derecho. A este proyecto se han opuesto de manera radical algunos sectores políticos mediante afirmaciones como que el acuerdo de justicia transicional es un pacto de impunidad, que el acuerdo sobre tierras no es más que demagogia agrarista para colectivizar el campo y destruir el agro productivo, que el acuerdo de participación política está construido en función de allanar el camino al Castro-Chavismo mediante la injustificada elección de los jefes de las FARC al Senado, las gobernaciones y alcaldías. Para *Cortés* esto es una falacia y una trampa política. Rechazar el acuerdo de paz, según él, conduciría a Colombia de nuevo a la guerra. Las FARC no resistirían un nuevo proceso de negociación en el que los temas más difíciles ya fueron superados.

Según *Cortés*, el argumento que fundamenta el paradigma jurídico y político de la “paz por medio del derecho”, propone pensar la disyuntiva “El Si es la paz - el No es la guerra”, en función de crear las condiciones económicas, sociales y políticas para que el mundo de la experiencia de los hombres dominado por la guerra se pueda convertir en un mundo de la humanidad ordenado por el derecho. Del contrato entre los ciudadanos que surge de abandonar la situación de guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza emerge el Estado, la libertad, la justicia, un horizonte de paz.

La paz que puede resultar del acuerdo final pactado entre las dos partes es *Paz negativa* porque pone el énfasis en la ausencia de guerra, de violencia directa y busca poner fin al conflicto armado. Pero el acuerdo plantea un horizonte con mayores perspectivas. Contiene la idea de la *Paz positiva*, la cual supone un nivel mayor de justicia social. “La paz por medio del derecho” no es una paz utópica; quiere decir: busca poner fin a una guerra entendida como empleo no regulado de la fuerza,

¹⁴ Profesor titular del Instituto de Filosofía de la UdeA y actualmente Director del mismo; estudios de Postdoctorado en la Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt a.M. (Alemania); Doctorado en Filosofía en la Universidad de Konstanz (Alemania); Magister en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá).

pero no al fin del uso de la fuerza. Esto tiene una consecuencia fundamental: las FARC como grupo armado se convertirá en actor político desarmado.

No es suficiente, sin embargo, con la paz negativa, es decir, con la firma del acuerdo final. Si no se realiza un programa orientado a la solución de los problemas económicos y sociales de los grupos más desfavorecidos, en términos de aseguramiento de medios para la subsistencia, salud, educación, trabajo, la anhelada paz terminará convirtiéndose en un programa vacío.

1.5. El Acuerdo Gobierno – FARC-EP sobre búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado

*Gloria María Gallego*¹⁵ presentó los resultados de su estudio sobre el primer punto del Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, concretamente lo relativo a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado¹⁶. *Gallego* analizó el fundamento moral, político y jurídico del acuerdo de paz¹⁷, y el contenido y alcance del mismo, a la luz de normas fundamentales del DIH que obligan a las partes en los conflictos armados internos a buscar e identificar a los muertos y dar destino decoroso a sus restos, así como a informar a los familiares de personas desaparecidas sobre el paradero y la suerte final de sus seres queridos.

Como otros ponentes en el foro, *Gallego* problematizó los argumentos de la oposición que desaprueba el acuerdo ante la ausencia de un componente más fuerte de justicia retributiva. Desde su punto de vista, con estas posiciones no solo se pone en juego la terminación del conflicto armado, sino, también, se ignora el rol de las víctimas y el derecho a la reparación de las mismas. El rol central de las víctimas cuyas familias han estado esperando por conocer la ubicación de sus parientes desaparecidos, sería dignificado por medio del acuerdo relativo a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Más allá de ello, el acuerdo representa una respuesta oficial del Estado colombiano acerca de los crímenes sobre millones de personas desaparecidas, lo cual siempre había sido negado.

¹⁵ Abogada de la UdeA y Doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza (España). Actualmente es Profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Eafit; Directora del Grupo de Investigación Justicia y Conflicto de la misma Universidad. Asimismo, Directora de la Cátedra de la Paz, la Memoria y la Reconciliación, recientemente inaugurada por Universidad Eafit, con la colaboración del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo Casa de la Memoria de Medellín.

¹⁶ Cfr. Gloria María Gallego, “El Acuerdo Gobierno – FARC sobre búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas. Análisis político y jurídico”, en *Revista Estudios del Derecho* 72(160), Medellín, UdeA, pp. 105-141.

¹⁷ El acuerdo abarca dos puntos: el primero comprende los compromisos entre el gobierno colombiano y las FARC-EP que obligan al gobierno para acelerar a la identificación de los restos de los guerrilleros caídos en combate y de los N.N., así como la obligación de las FARC-EP de entregar toda la información sobre los muertos producto de su violencia. El segundo punto establece la instalación de una unidad especial de carácter humanitario y extrajudicial para la búsqueda e identificación de los desaparecidos en el conflicto armado.

1.6. Paz o terminación del conflicto ¿qué apoyamos?

Para *John Zuluaga*¹⁸ la Corte Constitucional estableció la dimensión funcional de la Justicia Transicional frente al logro de la paz y, además, fijó criterios para la comprensión de la legitimación democrática de la justicia transicional. Según *Zuluaga*, esta doctrina de la Corte tiene sus antecedentes inmediatos en las sentencias C-577 de 2013 y C-579 de 2014¹⁹, en las cuales se discutieron los presupuestos normativos que anteceden los desarrollos del acuerdo entre gobierno y FARC-EP en materia de justicia, es decir, el *marco jurídico para la paz*.

Para el desarrollo de este análisis sobre la sentencia C-379 de 2016, enfatizó en dos variables de discusión. Primero, la interpretación sobre terminación del conflicto que se desprende de las consideraciones de la Corte Constitucional sobre la consecución de la paz con la firma del acuerdo entre gobierno y FARC-EP. Segundo, la posición de la Corte sobre legitimación democrática de la Justicia transicional. Para *Zuluaga*, estos dos tópicos sirven para ejemplarizar la configuración de una comprensión formalista de la justicia transicional y los rendimientos de dicho enfoque en la justificación de la consecución de una paz estable y duradera.

Desde el punto de vista de *Zuluaga*, la Corte Constitucional omite discutir sobre cómo y cuándo se considera terminado un conflicto. De las consideraciones de la Corte se deduce la prevalencia de un criterio formal (acuerdo de paz) para entender la terminación del conflicto. Frente a esta consideración, aclaró que el criterio determinante para definir la terminación de un conflicto no internacional es el *cese real de hostilidades*, más que un acuerdo formal de paz. Este yerro resulta reforzado si se tiene en cuenta que la Corte hace una interpretación extensiva de la vigencia del acuerdo a todos los grupos armados en Colombia. Para *Zuluaga*, esto no puede significar un cierre de las discusiones sobre acuerdos de justicia con otros grupos armados. En la doctrina de la Corte Constitucional prevalece un criterio formal (acuerdo de paz) para entender la terminación del conflicto. El criterio determinante para definir la terminación de un conflicto armado no internacional es el cese real de hostilidades (criterio material).

Sobre la *legitimación democrática de la justicia transicional*, se advirtió que la misma no puede reducirse a una refrendación plebiscitaria, sino que va más allá e implica una intervención activa de las víctimas en el diseño e implementación de los mecanismos judiciales y no judiciales de justicia transicional. *Zuluaga* criticó la posición de la Corte Constitucional según la cual “la legitimidad democrática del Acuerdo se deriva de la comprobación sobre la opinión verificable de las ciudadanas y ciudadanos, respecto de la validación del mismo”²⁰. Los rendimientos que le asigna la Corte Constitucional al plebiscito en materia de legitimación democrática respecto de un

¹⁸ Véase *infra* Los Autores; en detalle www.john-zuluaga.de

¹⁹ Estas sentencias fueron analizadas por el CEDPAL con el apoyo de la KAS en los siguientes estudios: Kai Ambos/Christian Steiner (Coords.), *Justicia de Transición y Constitución II. Análisis de la sentencia C-577 de 2014 de la Corte Constitucional*, Bogotá, CEDPAL-KAS-Temis, 2015; Kai Ambos (Coord.), *Justicia de Transición y Constitución. Análisis de la sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional*, Bogotá, Temis-CEDPAL-Konrad Adenauer, 2014. Al respecto, también, Kai Ambos/John Zuluaga, “Justicia de Transición y Constitución. Análisis de la sentencia C-579 de 2013 sobre el marco jurídico para la paz”, en *ZiS* 4/2014, Alemania, pp. 165-176.

²⁰ CC, *supra* nota 2, párr. 113.1.

tipo de justicia transicional promueve una necesaria discusión por lo menos sobre los siguientes cuestionamientos: ¿Plebiscito es igual a legitimación democrática de la Justicia transicional? ¿Se reduce la participación positiva/activa de las víctimas a un si o no en el plebiscito?

Al respecto, *Zuluaga* afirmó que según las tipologías de justicia transicional, las llamadas transiciones democráticamente legitimadas no se fundan exclusivamente en refrendaciones plebiscitarias y en ese marco el plebiscito es solo un mecanismo de refuerzo de la legitimación democrática. En concreto, la legitimación democrática de la justicia transicional no puede reducirse a una refrendación plebiscitaria (si o no), sino que implica una intervención activa de las víctimas en el diseño e implementación de los mecanismos judiciales y no judiciales de justicia transicional.

1.7. Resumen del primer foro

La pregunta por la configuración práctica de la paz encuentra en los acuerdos de La Habana una primera respuesta política y jurídica y se orienta por una política de la verdad, la reconciliación y la justicia. La configuración de la paz, más allá de eso, se basa en el reconocimiento ciudadano del acuerdo. Este reconocimiento exige la integración de una política sobre el establecimiento de la verdad, la justicia y la reconciliación, así como la participación activa de todos los colombianos. En cuanto a la problemática que convocó la realización del foro, es decir, la decisión plebiscitaria que se esperaba tomar el 2 de octubre de 2016, fueron discutidas las dimensiones psicosociales, políticas y constitucionales del proceso de paz entre el gobierno y las FARC-EP y el plebiscito que se previó realizar. Una posición compartida fue aquella según la cual la decisión del 2 de octubre dependía de la capacidad de los colombianos de superar el viejo y aún vigente esquema “amigo-enemigo”, para poder participar en un proceso activo de reconciliación y configurar la paz de una forma más participativa.

2. Perspectivas de la Justicia Transicional en Colombia (05.10.2016)

Después de la realización del plebiscito el 02.10.2016, las discusiones sobre el futuro del proceso de paz tuvieron un rumbo diferente. Ante la ratificación negativa del acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP, el debate giro entorno a cuestiones fundamentales relativas tanto al significado de la decisión plebiscitaria como a las posibilidades y la disposición para la renegociación, por un lado, entre el gobierno y la oposición y, por otro lado, entre el gobierno y las FARC-EP. Las conferencias ofrecidas durante el segundo foro por la paz se ocuparon de discutir sobre posibles soluciones ante el desafío de la no ratificación y acerca de las exigencias que ello planteó para la implementación del modelo de justicia transicional definido en el acuerdo final para la terminación del conflicto armado.

2.1. La justicia transicional y la recuperación de la cultura política en Colombia

Jorge Alberto Giraldo Ramírez²¹ presentó cinco tesis sobre la justicia transicional en Colombia: primero, la justicia transicional representa una *justicia política*. En ese sentido, los aspectos y contenidos sustanciales de la justicia transicional serán aquellos que la comunidad política pueda determinar de común acuerdo. No existen parámetros externos o trascendentales para la codificación de lo que es la justicia transicional. En ese sentido, el acuerdo desaprobado en el plebiscito enseña también que el acuerdo final solo define una paz parcial.

Segundo, la justicia transicional debe entenderse como un *medio* de transición de un régimen autoritario o una guerra a una democracia o a la paz. Esto significa que la transición tiene que ser construida a la medida de la posibilidad de la paz. Desde este punto de vista, la justicia transicional es una justicia instrumental o artificial, en tanto está orientada por la medida del conflicto.

Tercero, la justicia transicional es un *medio* a través del cual se facilita la transición de agentes sociales como enemigos del Estado al rol de ciudadanos. En este sentido, dicha justicia es construida respectivamente a la medida de ese fin, es decir, como instrumental.

Cuarto, la justicia transicional es una *construcción*. Según Ramírez, esta es la característica más difícil de aceptar de la justicia transicional, ya que ello exige que dos actores políticos desiguales – Presidente de la República y el jefe de la organización guerrillera de las FARC-EP – negocien y cierren acuerdos en la ficción de una igualdad de posición.

Finalmente, abogó por la recuperación de la *cultura política* en Colombia, que según Ramírez ha sido colonizada por el derecho. Desde el punto del plebiscito desaprobado, enfatizó que la cultura política no puede obtenerse por medio de consenso plebiscitario logrado legalmente, sino que debe ser alcanzado por medio de una “pedagogía de la diferencia”, “una pedagogía del acuerdo”.

²¹ Filósofo, Universidad Santo Tomás De Aquino; Magíster en Filosofía Política y Ph.D. en Filosofía de la UdeA (Medellín). Actualmente es Decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT (Medellín); La versión completa de su conferencia puede verse en Jorge Giraldo, “La justicia transicional es justicia política”, en Revista Debates 75 (Sep-Dic/2016), Medellín, UdeA, pp. 29 ss.

2.2. Justicia transicional entre negociación política y constitucionalidad: ¿Cuánta democracia y cuánta justicia necesita la justicia transicional?

Ana María Londoño Agudelo²² se ocupó de las posibilidades y límites de la justicia transicional en el marco de negociaciones políticas y, concretamente, de la constitucionalidad de la misma. Afirmó que el desarrollo internacional que viene dándose en los últimos años de una configuración legal de mecanismos judiciales para el inicio de procesos de transición de conflictos armados a democracias pacíficas, arrastra consigo eminentes decisiones políticas, las cuales van más allá de las competencias estatales soberanas. En una comunidad internacional en la que se limita la soberanía estatal por medio de instrumentos internacionales, tendrían que ser primeramente considerados los estándares legales que definen la víctima como sujeto. Esto quiere decir que los procesos transicionales no deben transcurrir como en el pasado. Las víctimas deben estar en primer plano como testigos del desarrollo internacional de la consciencia moral. Esto significa que desde una posición ética debe responderse a la pregunta cómo las sociedades deben transformar el dolor por medio de procesos colectivos.

Londoño Agudelo indagó sobre el rol del derecho en procesos sociales de reconciliación. ¿Cuánta política y cuánto derecho tienen que recaer en la justicia transicional? Londoño Agudelo se opuso a la posición de Giraldo Ramírez²³ según la cual el derecho tiene una posición crítica. El derecho diferencia exactamente entre lo político y lo legítimo políticamente. Ella aclaró que las negociaciones en Colombia representan una serie de medidas transicionales orientadas a diferentes aspectos sociales y políticos del conflicto colombiano. Asimismo, aclaró que la justicia transicional no puede ser reducida al logro de medidas penales alternativas, sino que también la misma ofrece una especial ayuda para comprender el conflicto armado. En ese sentido, calificó la iniciativa del plebiscito no como una clara decisión política, sino como una decisión político-jurídica que se enmarca en la figura constitucional del derecho a la paz (Art. 22 CN) y el derecho a la separación de poderes. Por ello, Londoño Agudelo desaprobó la tesis según la cual en las negociaciones de la Habana se tenían que instalar a los ciudadanos como constituyentes. Asimismo, advirtió que tampoco puede considerarse que la función judicial llegue a ser desplazada. Finalmente, Londoño Agudelo cuestionó si y en cuál medida la justicia transicional requiere elementos democráticos. Ella argumentó que la resonancia democrática por medio del plebiscito era y es importante, en tanto el conflicto colombiano tiene raíces políticas y socio-estructurales que solo por medio de la participación del pueblo en la transición pueden llegar a ser (re)dirigidas. La participación ciudadana sirve no solo a la legitimación política, sino, en último lugar a la realización social de una paz.

²² Abogada y profesora de derecho constitucional en la UdeA (Medellín); La versión completa de su conferencia puede verse en Ana María Londoño Agudelo, “Perspectivas de la justicia transicional en Colombia”, en Revista Debates 75 (Sep-Dic/2016), Medellín, UdeA, pp. 23 ss.

²³ Véase *supra* 2.1. La justicia transicional y la recuperación de la cultura política en Colombia.

2.3. Comentarios a la implementación de la justicia transicional y los cambios constitucionales luego del plebiscito

*Rafael Nieto Loaiza*²⁴ se ocupó de las características de la justicia transicional y el rol de la Corte Constitucional ante el hecho de la desaprobación del acuerdo por medio de plebiscito. Al contrario de lo expuesto por *Ana Maria Londoño*²⁵, él enfatizó que el proceso e implementación de la justicia transicional implicaría enormes transformaciones constitucionales, las cuales cambian no solo las reglas de juego democráticas, sino, también, los criterios para la designación de los jueces. *Nieto* criticó el proyecto de Tribunal para la paz y discutió su desapego a las reglas del derecho penal colombiano. Además, criticó la posición de las FARC-EP según la cual el acuerdo de paz posee el carácter internacional de un acuerdo especial, motivo por el cual entraría como un cuerpo normativo al bloque de constitucionalidad y no podría ser modificado. *Nieto Loaiza* contradijo esta afirmación, entre otras cosas porque como grupo guerrillero no poseen ninguna personalidad jurídica en el sentido de un sujeto del derecho internacional.

Finalmente, *Nieto Loaiza* se refirió al plebiscito y las declaraciones de las FARC-EP al respecto, en las que no aceptaron el desenlace negativo del plebiscito. *Nieto Loaiza* calificó la posición de las FARC-EP como peculiar jurídicamente, antidemocrática y falsa políticamente. El subrayó que el resultado desaprobatorio del plebiscito ofrece una oportunidad de carácter histórico para iniciar una renegociación e involucrar a toda la población en el debate sobre el acuerdo. El presidente tiene ahora la responsabilidad de iniciar un nuevo dialogo con la oposición para lograr un consenso político. El actual debate político se ha caracterizado por negativos señalamientos a la oposición y a los que votaron por la opción „NO“, lo que es de criticar. *Nieto Loaiza* advirtió que los miembros de la oposición están siendo tratados y desacreditados como los autores del conflicto.

2.4. La necesidad del consenso luego del plebiscito. Entre el discurso homogéneo y exclusivo y el discurso del repudio

*Darío Acevedo Carmona*²⁶ inició su intervención planteando que el resultado del plebiscito del 2.10.2016 en el que salió triunfante el NO al Acuerdo de La Habana, puede tener al menos dos reacciones: de un lado, quienes desde el NO, empezando por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, convocan a la renegociación de algunos aspectos y puntos problemáticos de tal forma que se alcance un gran consenso nacional por la paz. De otra parte, que el gobierno Santos una vez echó para atrás la idea esbozada días antes de la consulta a la ciudadanía en el sentido que de triunfar el

²⁴ Abogado con especialización en Derecho Penal, también experto en Derecho Internacional y periodista. Se desempeñó como Viceministro de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe. Es editorialista de varios medios nacionales.

²⁵ Véase *supra* 2.2. Justicia transicional entre negociación política y constitucionalidad: ¿Cuánta democracia y cuánta justicia necesita la justicia transicional?

²⁶ Historiador, investigador y ensayista colombiano. Doctorado en Historia de la Universidad de Huelva (España). Profesor titular de la Facultad de Ciencias Humanas y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín).

NO el Acuerdo perdía total vigencia y que la negociación llegaba a su fin, aceptó que era posible adelantar reformas a lo acordado.

Acevedo se refirió a tres aspectos importantes: Primero, insistió en que a la guerrilla de las FARC-EP no se le puede dar un estatus de igualdad con el Estado si se tiene en cuenta, más allá de razones teóricas, el estado de la correlación de fuerzas. Las FARC-EP no controlan ni ejercen autoridad permanente sobre amplias zonas habitadas del país, han violado sistemáticamente los DD.HH. y el DIH y carecen de apoyo sustancial entre la población. Además, afirmó que la narrativa que asocia el nacimiento de la guerrilla con el problema de la deficiente distribución de tierra y las desigualdades sociales vinculadas a esta problemática no es más que un enmascaramiento de su relación con un proyecto político de corte comunista. La guerrilla fracasó en su pretensión de hacer pertinentes y reconocidas sus consignas. Aunque la declaración de las FARC-EP según la cual la paz y la firma del acuerdo equivaldrían a justicia social goza de un gran apoyo entre intelectuales y académicos, esta tesis se basa en una confusión de causas políticas y socio-estructurales del conflicto y de su desarrollo militar y, por tanto, tiene un carácter ideológico y político y no académico. Es parte de una de las narrativas o relatos justificatorios de la existencia de guerrillas pero no se puede asumir como verdad oficial ni definitiva ni única.

Segundo, la discusión ha cambiado de tal manera que hoy en vez de un conflicto armado de baja intensidad se habla de guerra. Esto último llevaría a hablar de la clásica definición que supone la confrontación entre dos partes en igualdad de condiciones, punto de partida de las concesiones inaceptables para una buena parte de la población y de algunas fuerzas sociales y políticas. Tercero, *Acevedo* se ocupó del discurso homogeneizado y del discurso excluyente, que ha sido construido por académicos, columnistas y medios de comunicación y que va acompañado de una activa desinformación. Por un lado, los críticos no fueron ni escuchados ni preguntados en el debate precedente al plebiscito. Por otro, el Acuerdo de La Habana fue publicitado de manera facilista y falsa al decirse que el plebiscito sería una votación entre la paz y la guerra y no sobre el acuerdo de la Habana y que si triunfaba el NO se acabaría el proceso de negociación.

La reacción de muchos sectores y de parte de algunos ministros de Santos ante el triunfo del NO ha consistido en satanizar a quienes así votaron, tildándolos de insensatos, guerreristas e ignorantes y a tratar de minimizar su derrota porque el resultado fue muy apretado. Ante este panorama, *Acevedo* reclamó del Gobierno Nacional una postura sensata y un discurso homogéneo acerca del llamado a buscar a través de un consenso entre el gobierno y la oposición el camino para renegociar aspectos parciales del Acuerdo, sobre todo en lo referente a la cuestión del castigo para responsables de delitos atroces, elegibilidad política, carácter no constitucional del Acuerdo y narcotráfico como delito autónomo e internacional no conexo con el delito político. Las enmiendas al acuerdo que pueden resultar de posibles renegociaciones, no deben tener un carácter cosmético, sino que tienen que poseer un carácter fundamental sobre la base de lo que significa la desaprobación del plebiscito. Destacó, además, que la conformación de la justicia transicional no puede basarse en la ausencia de penas, pues los CLH y los crímenes de guerra deben sancionarse según el DPI. La justicia transicional consiste en buscar beneficios jurídicos como reducción de penas, pero no la impunidad absoluta.

Finalmente, observó que el Gobierno Santos podría ceder a la tentación de desconocer la voluntad popular expresada en el plebiscito, lo que tendría gravísimas consecuencias en la convivencia entre

los colombianos. En tal sentido, debe descartar llegar a esos peligrosos extremos si es que de verdad quiere que la paz esté apoyada por las inmensas mayorías del país.

2.5. Condiciones de la justicia transicional en Colombia

*William Fredy Pérez Toro*²⁷ calificó los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP como el símbolo por excelencia de una transición. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras transiciones (más imperceptibles e impunes, y de gran impacto social), la visibilidad y la refrendación popular de los acuerdos han generado una intensa polarización política en el país. En este marco, *Pérez Toro* desarrolló diez tesis sobre uno de los asuntos más polémicos y tergiversados en la coyuntura: la justicia transicional²⁸.

Primero, la justicia transicional solo es comprensible si se la diferencia de la justicia penal tradicional. Segundo, la justicia transicional implica lógicamente un importante despliegue de recursos, la expedición de una buena cantidad de normas, el establecimiento de otras competencias, la aplicación de reglas de procedimiento y castigos inusuales. Tercero, la justicia transicional es un mecanismo de desbloqueo constitucional y social que hace políticamente responsables –hacia el pasado y hacia el futuro– a los grupos que han ejercido violencia organizada. Cuarto, la justicia transicional es *transicional* porque permite que las sociedades *transiten* de un estado de cosas a otro; es decir, de una situación bélica, a una situación en la cual predominan las formas políticas y regladas de tramitar conflictos entre grupos con pretensiones incompatibles. Quinto, la justicia transicional define responsabilidades y establece compromisos sin recurrir al expediente de la violencia militar. Sexto, la justicia transicional se mantiene firme contra la impunidad, pero la pena intramural es solo una de las posibles sanciones. Séptimo, la aceptación de la justicia transicional requiere de un cierto grado de sensibilidad frente al sufrimiento humano. Octavo, la justicia transicional no está prefigurada en los textos ni está definida por la naturaleza, sino que ella es fruto de acuerdos específicos, logrados en momentos y por actores sociales y políticos concretos. Noveno, el diseño de justicia transicional logrado recientemente en Colombia, constituye un mecanismo integral y garantiza verdad, justicia, reparación y no repetición. Décimo, la justicia transicional exige la implementación del acuerdo sobre garantías para la seguridad en la lucha contra organizaciones criminales y la construcción de paz. *Pérez Toro* resumió que la justicia transicional es solo una opción; la opción por una idea racional y correcta que podrá ser a su vez interpretable, limitable y corregible en su ejecución.

2.6. Resumen del segundo foro

El resultado del plebiscito sobre el acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP fue el objeto del segundo foro por la paz. En el foro se discutió ampliamente sobre las exigencias que se derivan del resultado del plebiscito, que dejó ampliamente dividida a la sociedad colombiana. Se insistió en la

²⁷ Abogado de la UdeA; Magister en Criminología y Profesor del Instituto de Estudios Políticos en la UdeA.

²⁸ Para la versión completa de su conferencia véase William Fredy Pérez Toro, “justicia transicional derrotada”, en Revista Debates 75 (Sep-Dic/2016), Medellín, UdeA, pp. 15 ss.

necesidad de buscar un consenso político entre el gobierno y la oposición política al mismo. De igual manera, se debatió sobre las múltiples características que definen la justicia transicional como una justicia instrumental y política. Se insistió en la diferencia que hay entre la justicia transicional y la justicia penal, en el sentido de que la primera no resulta comprensible como una justicia formal. En esa medida, se cuestionó la amplia juridización de la transición política colombiana y la pretensión de judicialización (en términos del derecho penal ordinario) de las soluciones a ese conflicto.

3. Dilemas de la justicia penal en el proceso de paz en Colombia (01.12.2016)

El tercer foro tematizó la tensión que se recrea con la implementación de la justicia transicional en Colombia entre los valores de la justicia y la paz, el derecho y la política, la justicia retributiva –orientada al pasado– y la justicia restaurativa –orientada al futuro–. El concepto de justicia transicional exige que determinadas normas de la justicia ordinaria deban ser sacrificadas para el logro de la paz. Esto significa que un énfasis exclusivo en la justicia retributiva, orientado por la gravedad de los crímenes y a la ejecución de penas privativas de la libertad, no puede ser acogido de forma tan simple. En relación a la justicia penal clásica, el modelo de justicia transicional en Colombia no puede castigar crímenes masivos individual y maximalistamente por medio de un modelo paralelo de persecución de crímenes, sino que es necesario desarrollar alternativas penales. Las cuatro conferencias que a continuación se describen, discutieron la relación del modelo de justicia transicional y la justicia ordinaria en el contexto político, moral y jurídico colombiano.

3.1. Justicia transicional en Colombia. ¿un modelo para la continuidad?

*John Zuluaga Taborda*²⁹ expuso su análisis y crítica a la JEP³⁰ en relación con la justicia ordinaria. Su reflexión sobre la implementación de la justicia transicional y sus límites parten de la crítica a la delimitación del modelo colombiano de justicia transicional por dicotomías como “castigo-impunidad” o “paz y guerra”. En correspondencia con esos límites justificantes, el modelo colombiano ha fijado como parámetro preponderante de transición un dispositivo penal: la JEP³¹. Por otro lado, *Zuluaga* destacó el problema del carácter funcional de un modelo formal-legalista al frente de la superación de las dinámicas de violaciones masivas a DD.HH. La tradición del *ethos* legalista³² continúa inspirando al modelo colombiano de justicia transicional e impide la concepción y el desarrollo de mecanismos extrajudiciales a pesar de la configuración del modelo como un sistema integral (SIVJNR). Para él, la cuestión a entender es por qué se insiste en este tipo de dispositivos si precisamente las justificaciones de la justicia transicional surgen en el

²⁹ Véase *infra* Los Autores; en detalle www.john-zuluaga.de

³⁰ La JEP se ha introducido como el componente de justicia del SIVJNR. Según lo acordado entre el Gobierno y las FARC-EP, la JEP es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al DIH o graves violaciones de los DD.HH. En concreto, la JEP acoge la posibilidad de investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves y se aplica a todos los que de manera directa o indirecta han participado en el conflicto. Cfr. al respecto *Zuluaga*, *supra* nota 6, con más referencias sobre la JEP.

³¹ De esto deja constancia el hecho de que la renegociación postplebiscito se ha hecho fundamentalmente en el marco de los parámetros orientadores de la JEP. Al respecto véase *supra* 2. Perspectivas de la Justicia Transicional en Colombia (05.10.2016).

³² Ese *ethos* legalista, que ha condicionado la evolución de mecanismos de justicia transicional en Colombia, ha constituido al proceso penal como una forma preponderante para la realización de sus propósitos esenciales. Tanto con base en la llamada LJP como en la Ley de Víctimas, el MJP y la JEP se han introducido componentes jurídicos, especialmente penales, a partir de los cuales se intenta resolver no sólo las demandas de justicia, sino, también y de manera más enfática, de verdad.

reconocimiento del carácter limitado del derecho penal y procesal penal (ordinario) en torno a dinámicas masivas de comisión de crímenes.

Zuluaga aclaró que la judicialización del conflicto armado es constancia de una adaptación funcional a múltiples necesidades políticas y coyunturales. La tendencia punitiva del modelo colombiano de justicia transicional prioriza una utilización instrumental, selectiva y desigual del derecho penal. La JEP establece el proceso penal como condición de su concreción, pero sin definir claras condiciones materiales para su realización. Según *Zuluaga*, el optimismo en la utilización del derecho penal como parámetro de transición pasa por alto que la transición no se realiza solo exclusivamente desde variantes legalistas de justicia. *Zuluaga* llegó a la conclusión de que el modelo colombiano de justicia transicional que se sintetiza en la JEP no logra ser un proyecto de restauración. El mismo se podría caracterizar desde ahora como un modelo que sobrecarga el aparato judicial, burocratiza las soluciones al conflicto y anticipa la ineficacia del SIVJNR. Con esta concepción de justicia transicional se distorsiona por completo la idea según la cual el proceso es apenas un momento formalizado y limitado para elaborar y definir un conflicto propio del mundo de los delitos.

3.2. Transformaciones y continuidades del sistema penal colombiano en su desarrollo histórico

*Julio González Zapata*³³ analizó el sistema penal colombiano para aclarar la necesidad de reformar dicho sistema a favor de la construcción de una paz estable en el postconflicto. Solo si tiene lugar una revisión del sistema penal se podría contribuir a asegurar la garantía de no repetición y podría evitarse el riesgo de un estado de conflictividad social y una sociedad marcada por nuevas violencias.

Históricamente visto, hay una tendencia a utilizar el sistema penal como un instrumento contra grupos subversivos en el conflicto colombiano. Esta tradición se basa en la suposición de que cada conflicto político, social o económico se reduce a un problema de orden público y que los mismos pueden remediarse militar o judicialmente por medio de la invocación de estados de excepción. *González* destacó el rol de la justicia penal en Colombia durante el conflicto armado y su evolución desde el estado de sitio con el empleo de un especial derecho penal de enemigo – que se separa de los principios y normas rectoras del derecho penal – hasta el Estado de derecho en el que persisten rezagos del estado de sitio. La continuidad que existe entre la justicia penal militar, la jurisdicción de orden público y subsiguientes jurisdicciones especiales, es relevante porque permite entender nuevas cuestiones respecto del castigo penal. Además, los tratados internacionales condicionan la configuración del sistema penal, así como las comprensiones jurídicas más actuales sobre el castigo penal. En las nuevas tendencias, tanto a las políticas de seguridad como al rol de las víctimas se les concede una especial centralidad en esas comprensiones. A pesar de ello, según *González*, los

³³ Profesor en el área de derecho penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA (Medellín); La versión completa de su conferencia puede verse en Julio González, “La justicia penal en el posconflicto”, en *Revista Debates* 75 (Sep-Dic/2016), Medellín, UdeA, pp. 7 ss.

intereses de las víctimas raramente se consideran de forma efectiva. Al contrario, hay una tendencia para instrumentalizar a las víctimas a los fines de fortalecer la legitimidad del nuevo régimen de derecho penal.

González aclaró que la justicia ordinaria es un instrumento para establecer la responsabilidad de una persona en un delito. La justicia transicional, al contrario, es un mecanismo por medio del cual se intenta solucionar conflictos que provocaron la violación masiva de DD.HH. por medio de la reconciliación de toda la sociedad. El conflicto es visto como algo colectivo frente a lo cual se plantean respuestas colectivas a la manera de reformas institucionales, el establecimiento de justicia, verdad, reparación y no repetición. Es necesario definir los límites entre justicia ordinaria y justicia transicional. A los fines de asegurar coherencia político criminal al respecto es necesario reformar completamente el sistema penal, de tal manera que pueda contribuir a la construcción de la paz y no se convierta en un obstáculo para ello.

3.3. El rol de la moral en el conflicto colombiano y en el actual proceso de paz: justicia, verdad, reparación y no repetición

La filósofa *Beatriz Restrepo Gallego*³⁴ discutió desde el punto de vista filosófico moral sobre el valor de la justicia en el conflicto colombiano. Ella postuló que el aspecto moral es de fundamental significado en la actual situación del conflicto armado. La pregunta central de su conferencia giro entorno a la determinación de un adecuado modelo de justicia para comprender el conflicto colombiano como un asunto fundamentalmente moral. Con base en la ética moderna, de mediados del siglo pasado, y del desarrollo al interior de la filosofía en relación a las desgarradoras experiencias del holocausto, *Restrepo* revisó un panorama de paradigmas filosófico morales desde la felicidad aristotélica y el deber moral kantiano hasta la ética del sufrimiento y la compasión que surgió después de la segunda guerra mundial y que tiene como referente “el otro”, “el ser humano”, cuyo sufrimiento debe ser atendido por cada ser humano.

Restrepo se preguntó si estamos en condiciones de aceptar el sufrimiento de muchos ciudadanos como un mal moral y adaptarlo dentro de la ética. La tregua y los acuerdos de “La Habana” no permiten lograr claridad, por un lado, sobre quienes son las víctimas del conflicto y cuál fue su historia. Por otro lado, tampoco existe claridad sobre cuáles intereses jurídicos, legislativos y privados se encuentran detrás del conflicto y las negociaciones. Para *Restrepo* no se percibe en los acuerdos una centralidad de los mismos en el ser humano y, por ello, no se aborda la centralidad del conflicto. La ausencia del ser humano (identificado en el manto de las víctimas) da cuenta de la falta de confrontación con la dimensión moral del conflicto. Solo la organización política de los actuales movimientos de víctimas ha permitido aclarar el inmenso rol de estas víctimas en la lucha por sus derechos – ante la ausencia del Estado –. Cuando las víctimas hacen visible su dolor, ese

³⁴ Ex-decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UdeA; B.A. en Filosofía, Manhattanville College, N.Y. University, New York, EUA; M.A. en Filosofía y Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Central de Madrid; Especialización en Ética, Instituto Superior de Filosofía, Universidad Católica de Lovaina la Nueva, Bélgica.

sufrimiento se vuelve un hecho político. Es solo por ello que las víctimas han podido ser escuchadas.

Según *Restrepo*, el actual proceso de paz tiene dos dimensiones centrales: la moral y la política. La generosidad, la compasión y la solidaridad de las víctimas con sus conciudadanos tiene que ser confrontada, según *Restrepo*, con el comportamiento de “oídos sordos” y “ojos ciegos” de muchos colombianos, así como la omisión pública de asumir la responsabilidad moral. La ignorancia al frente del sufrimiento de las víctimas y la deshumanización del conflicto es el problema moral propio en el actual proceso.

Restrepo cerró con la afirmación de que la justicia transicional es una forma tanto de jurisdicción como de justicia que necesita este proceso, porque la misma coloca a la víctima en el centro del debate al contrario de la justicia ordinaria para la que interesa la definición de una hipótesis de autoría o participación en un hecho punible.

3.4. La justicia transicional punitiva y el pensamiento de la venganza

*Armando Luis Calle Calderón*³⁵ planteó la tesis según la cual el sistema penal le hace un inmenso daño al sistema de justicia transicional y a los derechos de las víctimas que dicha justicia busca garantizar. Para *Calle Calderón* el problema central es el de la paz, cuyo alcance es el que explica y justifica la existencia del Estado, desde las historias canónicas del pensamiento político, Maquiavelo, Bodin y Hobbes, para el que la primera y fundamental ley de la naturaleza es búsqueda de la paz. Según *Calle Calderón*, ello debe ser el telos esencial de la comunidad política, una necesidad, aunque se la demore y como una preocupación moral de las generaciones de hoy y de mañana. Y aunque los guerreristas, los contrarrevolucionarios y los antimodernos (Joseph de Maistre) lo hayan atacado y lo ataquen a favor de la instauración de un proyecto político e ideológico en cuya perspectiva domina la idea de la guerra y de la muerte como un fin en sí mismos.

A partir del proyecto de paz que tiene su origen en la modernidad y de la idea de Estado de derecho, *Calle Calderón* hizo referencia a la concepción de paz de la modernidad como condición sin la que la Constitución republicana – que tiene fundamento en el principio de libertad, dependencia a una legislación común e igualdad entre ciudadanos – no puede existir. La Constitución colombiana de 1991 es heredera del proyecto pacifista de la modernidad desde el punto de vista político, filosófico, jurídico y cultural. La paz se ha fijado en la CN en una triple dimensión: como valor, como derecho y como deber de raigambre constitucional. *Calle Calderón* recordó que durante los últimos 25 años de vigencia de la CN los colombianos han sido incapaces de consolidar un juego de circunstancias a favor de la realización de un proyecto de convivencia orientado por el compromiso genuino con la paz.

Para *Calle Calderón*, es urgente superar los aires de conflictividad para pasar a la construcción de la paz. No habrá paz sincera si la misma no sirve para desenmascarar el papel funcional del derecho

³⁵ Abogado de la UdeA; Doctor en Derecho, Universidad de Girona (España) y Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA.

frente a la violación de DD.HH y del derecho penal como un instrumento para gobernar y para el maltrato político de la disidencia. La justicia transicional necesita diferenciarse de la justicia penal y a la misma no se puede exigir satisfacer otros deberes distintos a la reconciliación, precisamente porque, entre otras cosas, es absurdo que una de las dos partes en el proceso de solución del conflicto armado amenace a la otra con castigos intramurales. El concepto de la justicia transicional no tiene que contar con las urgencias de la justicia penal. Según *Calle Calderón*, una práctica retributiva en la forma de castigos carcelarios fomenta la venganza y, asimismo, la reproducción de la violencia. El acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP se basa en una justicia transicional punitiva y, por ello, podría ser que no se logre ninguna reforma general del sistema penal para reducir la carga punitiva que adolece.

3.5. Resumen del tercer foro

Más allá de todos los cuestionamientos sobre la capacidad del modelo colombiano de justicia transicional para determinar el logro de los objetivos planteados, en el tercer foro se criticó enfáticamente el encasillamiento de dicho modelo en variantes jurídico-penales y la poca diferenciación con la justicia penal ordinaria que se aseguró en el marco de la renegociación postplebiscitaria. Este énfasis punitivo de la justicia transicional es inconducente para la superación de históricas vicisitudes democráticas en Colombia. Dicho encasillamiento toma cuerpo y se visibiliza mejor en la JEP y, con ella, en la construcción de cierto optimismo en el uso de la pena y del derecho penal como parámetros de transición.

4. Conclusiones generales sobre el ciclo de foros por la paz en Colombia

A partir de las distintas presentaciones y discusiones que tuvieron lugar en el ciclo de foros por la paz en Colombia, a manera de síntesis se puede decir que el actual proceso de paz que se sintetizó en el acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP es muy prometedor. A pesar del considerable apoyo al mismo tanto en Colombia como en el extranjero, la continuidad político-social del proceso y la persistencia en la praxis de la justicia para la transición es vaga e incierta. Nadie puede refutar que Colombia ha dado importantes pasos – especialmente en el año 2016 – en el camino hacia la paz. Sin embargo, tal como lo confirma la doctrina sobre la búsqueda de paz y los procesos de desmovilización en Colombia, el fin del conflicto – a pesar de la continuidad de la violencia – encontró mucho antes especiales condiciones para su logro³⁶, las cuales podría decirse que predijeron la continuidad de un proyecto de justicia transicional sin transición. La decisión de si el camino a la paz en Colombia sigue buscándose por vías indirectas o se efectúa de forma directa y continua, depende de muchas dinámicas, pero concretamente de la realización de los contenidos del acuerdo final de paz en la forma de leyes e iniciativas políticas, así como de la configuración y utilización de la justicia transicional. Esta misma y a pesar de sus problemas, debe superarse como un “modelo para la continuidad” en el sentido del tercer foro por la paz.

Una pregunta crítica en relación a la aplicación de la justicia transicional, es si una apropiación de mecanismos jurídicos para la justicia transicional puede promover efectivamente una *transición* en contextos de *no transicionabilidad* (política y social). El destino del proceso de paz colombiano depende – en el sentido del primer foro – inicialmente del respaldo de la población colombiana. Sin embargo, un cambio en la cultura política del país no puede solucionar por sí solo los contenidos paradójicos y centrales del conflicto armado y social en Colombia. Solo si en el postconflicto se abordan con prioridad los problemas estructurales, sociales y políticos subordinados al histórico conflicto, como son la pobreza extrema, la inequidad social y la baja y desigual participación de los ciudadanos de diferente origen étnico y social, podría la justicia transicional respaldar la superación del callejón sin salida del conflicto colombiano. Motivos de esperanza en el actual proceso de paz se encuentran en la participación de las nuevas generaciones y de las víctimas del conflicto en la performatividad, la continuidad y la transformación de este proceso. En ese sentido, con el ciclo de foros por la paz en la UdeA se instaló un diálogo de paz.

³⁶ Véase al respecto el trabajo de Michael Reed Hurtado, en el que el fenómeno de la transición sin transición llega a ser planteado: Reed Hurtado, Michael (2010), *Transitional Justice Under Fire: Five Reflections on the Colombian Case*. en Lyons, Amanda (ed.). *Contested Transitions: Dilemmas of Transitional Justice in Colombia and Comparative Experience*, ICTJ, Bogotá, pp. 87-114.

Los Autores

John Zuluaga LL.M. Abogado de la UdeA, Master of Laws (LL.M.) y Dr. iur (cand.) de la Georg-August-Universität Göttingen (GAU, Alemania). Actualmente es Profesor adjunto al Instituto de Filosofía de la UdeA en el área de Justicia Transicional e investigador adscripto al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la GAU.

Sophie Rähme. Estudiante en la Universidad de Goethe (GU, Alemania) en Sociología (B.A.) y en Filosofía (Magister). Estudiante de intercambio en el primer y segundo semestre de 2016 en el Instituto de Filosofía de la UdeA.

Tagungsbericht
Serie der Foren für den Frieden in Kolumbien
Universidad de Antioquia (Medellín- Kolumbien), Semester 2016/2

Inhaltsverzeichnis

Präsentation CEDPAL.....	38
Präsentation des Instituts für Philosophie - UdeA	39
Vorwort der Autoren	40
Abkürzungsverzeichnis	41
Einleitung	43
1. Analyse des Plebiszits und die Konstitutionalität der Übergangsjustiz (01.09.2016)	45
1.1. Versöhnung und Wahrheit in der Absicht des Plebiszits und der Übergangsjustiz	45
1.2. Die Konstruktion der Politik der Angst und des Hasses: Soziopolitische Reflexionen über das Plebiszit für den Frieden	46
1.3. Das Plebiszit für den Frieden	47
1.4. Krieg, Recht und Frieden	48
1.5. Das Abkommen zwischen Regierung und FARC-EP über die „Suche, Identifikation und würdevolle Einhändigung der Überreste der verschwundenen Personen im bewaffneten Konflikt“	49
1.6. Frieden oder Beendigung des Konfliktes – wofür stehen wir?	50
1.7. Fazit zum ersten Forum.....	51
2. Perspektiven der Übergangsjustiz in Kolumbien (05.10.2016)	52
2.1. Die Übergangsjustiz und die Zurückgewinnung der politischen Kultur in Kolumbien.....	52
2.2. Übergangsjustiz zwischen politischer Verhandlung und Konstitutionalität: Wie viel Demokratie und wie viel Gerichtsbarkeit braucht die Übergangsjustiz?	53
2.3. Post-plebiszitäre Kommentare zur Implementierung der Übergangsjustiz und den konstitutionellen Veränderungen	54
2.4. Die post-plebiszitäre Notwendigkeit der Konsensfindung in einem homogenisierten und exklusiven Diskurs der Ablehnung	54
2.5. Voraussetzungen der Übergangsjustiz in Kolumbien	56
2.6. Fazit zum zweiten Forum.....	57
3. Probleme der Strafjustiz im Friedensprozess (01.12.2016)	58
3.1. Übergangsjustiz in Kolumbien: Ein Modell für den Fortbestand?	58
3.2. Veränderungen und Kontinuitäten des kolumbianischen Strafsystems im historischen Wandel	59
3.3. Die Rolle von Moral im kolumbianischen Konflikt und im aktuellen Prozess zum Frieden: Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und Nicht-Wiederholung.....	60
3.4. Die strafende Übergangsjustiz und der Gedanke an Vergeltung	61
3.5. Fazit zum dritten Forum.....	61
4. Gesamtfazit zur Serie der Foren zum Frieden in Kolumbien.....	63
Autoren.....	65

Präsentation CEDPAL

Die Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht (*Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal* -CEDPAL) ist eine unabhängige Einrichtung des Instituts für Kriminalwissenschaften der juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen (GAU). Sie ist der Abteilung für ausländisches und internationales Strafrecht angegliedert. Die Forschungsstelle wurde am 10. Dezember 2013 durch einen Präsidiumsbeschluss der GAU aufgrund des Beschlusses des juristischen Fakultätsrates vom 6. November 2013 (Beschluss Nr. 58) gegründet. Sie will Untersuchungen zum lateinamerikanischen Straf- und Strafprozessrecht auf verschiedene Art und Weise zu fördern. Ferner soll auch die strafrechtliche Lehre in Lateinamerika durch unterschiedliche akademische Kursangebote unterstützt werden. Teil der Forschungsstelle sind ein Vorstand, ein Sekretariat und ein wissenschaftlicher Beirat, sowie extern tätige Wissenschaftler/-innen (siehe <http://cedpal.uni-goettingen.de>).

Eine der zentralen Aktivitäten des CEDPAL ist die Förderung und die Entwicklung des wissenschaftlichen Austauschs. So präsentieren wir in dieser kleinen Veröffentlichung einen Tagungsbericht der „Serie der Foren für den Frieden in Kolumbien“, die durch das Institut für Philosophie (Forschungsgruppe Politische Philosophie) und das Rektorat der Universität von Antioquia, mit Unterstützung des CEDPAL, durchgeführt wurde. In insgesamt drei Foren wurden grundlegende Themen mit Blick auf den Friedensprozess, den Post-Konflikt und die Konsolidierung des Friedens in Kolumbien diskutiert. Der Tagungsbericht fasst die jeweiligen Vorträge zusammen. Mit der bilingualen Edition in Spanisch und Deutsch wird versucht, den kolumbianisch-deutschen Dialog anzuregen und vor allem die deutsche Öffentlichkeit über den einzigartigen Friedens- und Transitionsprozess in Kolumbien zu informieren.

Wir danken an dieser Stelle allen, die die Veröffentlichung möglich gemacht haben: Zum einem hat das Rektorat und das Institut für Philosophie der Universität von Antioquia die Organisation der Veranstaltungsreihe ermöglicht; zum anderen haben John Zuluaga und Sophie Rähme diese bilinguale Edition vorbereitet. Natürlich gilt unser Dank auch jedem Redner/ jeder Rednerin und jedem sonstigen Teilnehmer der Foren, denn ohne sie wären die hier dokumentierten wichtigen Reflexionen nicht möglich gewesen.

Kai Ambros
Direktor
Göttingen, Februar 2017

Präsentation des Instituts für Philosophie - UdeA

Das Institut für Philosophie ist eine wissenschaftliche Einheit, die 1988 mit dem Anliegen der philosophischen Forschung eine Priorität einzuräumen, gegründet wurde. Diese Mission realisiert sich in individuellen Forschungsprojekten, in Projekten von Forschungsgruppen, in der philosophischen Lehre und interdisziplinären Projekten. Außerordentliche Aktivitäten, die sich im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit des Institutes entwickeln, werden durch die Verbreitung der Arbeit von Professoren und Studenten in ihren jeweiligen Lehr- und Forschungsfeldern angestrebt.

Die Reihe von Foren, die im zweiten Semester durchgeführt wurde, antwortet auf die Initiative der Forschungsgruppe der Politischen Philosophie zur Übergangsgerechtiz. Diese Initiative verdeutlichte die Notwendigkeit von Prozessen der politischen Bildung für das Verständnis der Abkommen und Verhandlungen von Havanna, für die Aufklärung der politischen Bedeutung des Plebiszits sowie für die Konstruktion des Friedens in Kolumbien. Dies führt zu einem Prozess der öffentlichen Reflexion innerhalb der universitären Gemeinschaft über die Vielfalt der Positionen und Ansichten gegenüber den Verhandlungsprozessen und über die Verantwortung der Aktivitäten, die von der öffentlichen Universität im Sektor der Zivilgesellschaft vorangetrieben werden. Obwohl klar ist, dass die Universität nicht direkt auf die Verhandlungen einwirkt, ist die Rolle, die sie im öffentlichen Meinungsbildungsprozess spielt und als Empfänger einiger Dynamiken des Post-Konfliktes im Zusammenhang mit der Implementation der Abkommen darstellt, überaus wichtig. In dieser Hinsicht stellt die Serie der Foren ein ideales Szenario des öffentlichen Diskurses bürgerlicher, politischer, philosophischer und juridischer Verständnisse innerhalb des kolumbianischen Friedensprozesses dar.

Wir danken allen, die an der Realisierung der Foren beteiligt waren. Vor allem den einzelnen Rednern und Rednerinnen, die die Debatten und Diskussionen über die multiplen Problematiken, die mit dem Übergang vom bewaffneten Konflikt zur Konstruktion des Friedens in Kolumbien verbunden sind, angestoßen haben.

Francisco Cortés
Direktor
Institut für Philosophie
Universität von Antioquia

Vorwort der Autoren

Mit der Ankündigung eines Abkommens zum umfassenden und endgültigen Frieden³⁷ wurde der Konflikt zwischen der kolumbianischen Regierung und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Pueblo - FARC-EP*) beendet. Nach einem Krieg von mehr als 50 Jahren wurden in dem Abkommen die Vereinbarung der Bedingungen des bewaffneten Konflikts in Kolumbien und des Aufbaus eines stabilen und dauerhaften Friedens definiert. Der Abschluss der Verhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-EP bietet eine Chance für die Rekonstruktion und die Wiedergutmachung der Schäden, die Gewalt, verknüpft mit dem bewaffneten Konflikt, zurückgelassen hat. Mit der Absicht, sowohl diese Entwicklungen, als auch die damit verbundenen Herausforderungen zu diskutieren, förderten das Institut für Philosophie und der Rektor der Universität von Antioquia unter Mithilfe der Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht (*Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal -CEDPAL-*) der Georg-August-Universität Göttingen während des zweiten Halbjahres 2016 die Realisation einer Serie der Foren für den Frieden. In dieser Reihe wurden die grundlegenden Aspekte des Friedensprozesses und die Konsolidierung des Post-Konflikts in Kolumbien diskutiert.

Wir danken allen, die die Realisierung der jeweiligen Foren ermöglicht haben, vor allem den Mitgliedern der Universität von Antioquia, die für Organisation und Durchführung der Foren verantwortlich waren. Unser besonderer Dank geht an Ana María Londoño, Rafael Nieto Loaiza, Armando Luís Calle Calderón, Beatriz Restrepo Gallego, Bernardita Pérez Restrepo, Darío Acevedo Carmona, Francisco Cortés Rodas, Gabriel Ignacio Gómez, Gloria María Gallego, Jorge Giraldo, Julio González Zapata, Miguel Humberto Jaime, und William Fredy Pérez für die Teilnahme an den Foren und ihre Vorträge.

John Zuluaga
Sophie Rähme

Medellín, Februar 2017

³⁷ Das Abkommen vom 24.08.2016 kann unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf (Stand 20.02.2017).

Abkürzungsverzeichnis

AL	Acto Legislativo (Legislativakt)
Art.	Artikel
CC	Corte Constitucional -Colombia- (siehe auch KVerfG)
CVR	Comisión (o Comisiones) de Verdad y Reconciliación (ver también: TRC) (Wahrheits- und Versöhnungskommission)
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias- Ejército Pueblo de Colombia (Revolutionäre Streitkräfte- Armee des Volkes von Kolumbien)
Fn	Fußnote
GAOML	Grupo(s) Armado(s) Organizado(s) al Margen de la Ley (die außerhalb des Gesetzes stehenden organisierten bewaffneten Gruppen)
IStGH	Internationaler Strafgerichtshof
ICTJ	International Centre for Transitional Justice
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz (Sondergerichtsbarkeit für den Frieden)
JT	Justicia Transicional (Übergangsjustiz)
KVerfG	Kolumbianisches Verfassungsgericht (siehe auch CC)
LJP	Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) (Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden)
MJP	Marco Jurídico para la Paz (Rechtsrahmen für den Frieden)
SIVJRNR	Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (Integrale System für Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Nichtwiederholung)
UdeA	Universidad de Antioquia (Medellín, Kolumbien)
ZIS	Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik < www.zis-online.com >

Tagungsbericht
Serie der Foren für den Frieden in Kolumbien
Universidad de Antioquia (Medellín-Kolumbien), Semester 2016/2

Sophie Rähme

Einleitung

Nachdem Kolumbien im vergangenen Jahr mit der Verabschiedung und der Ablehnung des Referendums des am 24. August 2016 beschlossenen Abkommens über die kolumbianische „Sondergerichtsbarkeit für den Frieden“ zweimal Geschichte schrieb, rückte ein stabiler und dauerhafter Friede in greifbare Nähe. Für den 52 Jahre währenden Konflikt zwischen Regierung und der linksgerichteten Guerillagruppe FARC-EP scheint endlich eine Lösung nahe. Nun zeigt sich aber auch die Problematik von Postkonflikt- und Friedensprozessen: Die gesellschaftspolitische Suche im Labyrinth der Transition zwischen Konflikt-Vergangenheit und der auf Zukunft ausgerichteten Übergangsjustiz verlangt nach einem kontinuierlichen Prozess der politischen, juristischen und sozialen Realisierung des Friedens. Daneben stehen die Probleme der kolumbianischen Strafjustiz hinsichtlich der Realisierung der Übergangsjustiz, die sich in den Spannungsfeldern zwischen den Werten von Gerechtigkeit und Frieden, Recht und Politik und retributiver sowie restaurativer Gerechtigkeit fortsetzen.

Die Reihe der drei interdisziplinären Foren für den Frieden in Kolumbien wurde in der Absicht durchgeführt, Vor- und Nachteile dieses Abkommens zu diskutieren, und begleitete das historische Auf und Ab der kolumbianischen Bemühungen um die Herbeiführung des Friedens im Zeitraum zwischen September und Dezember 2016. Damit bietet sie eine zeitgeschichtliche Reflexion der gesellschaftspolitischen Prozesse und Transitionen aus philosophischer, historischer, juristischer und politischer Perspektive. Die UdeA nahm dadurch ihre zentrale bildungspolitische Rolle als öffentliche Universität im gegenwärtigen Friedensprozess wahr und wirkte im aktuellen Meinungsbildungsprozess aktiv mit. Im Verlauf der einzelnen Foren sollten fundamentale Aspekte, die mit dem gegenwärtigen Friedensprozess und der Festigung des Postkonfliktes in Kolumbien verbunden sind, diskutiert werden. Die drei Foren behandelten folgende Themen:

- Das Plebiszit und die Konstitutionalität der Übergangsjustiz;
- Perspektiven der Übergangsjustiz in Kolumbien;
- Probleme der Strafjustiz im Friedensprozess.

Mit dem Abschluss eines Friedensabkommens³⁸ am 24 August 2016 wurde dem Konflikt zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-EP durch die Festlegung von Konditionen zur

³⁸ Für das Abkommen vom 24.08.2016 siehe *supra* Fn. 37 (Stand 20.02.2017).

Beendigung des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien und der Konstruktion eines stabilen und anhaltenden Friedens formal ein Ende gesetzt. Die Verhandlungen von La Habana sowie das Abkommen zwischen der größten Guerillagruppe, der FARC-EP, und der Regierung unter Präsident Santos, die nur zwei der Akteure des zeitlich und geographisch heterogen verlaufenden kolumbianischen Konfliktes³⁹ darstellen, haben einen symbolischen und historischen Wert im langwierigen Friedensprozess. Nachdem das Abkommen vom 24.08.2016 am 2. Oktober 2016 in einer plebiszitären Abstimmung von einer hauchdünnen Mehrheit der kolumbianischen Bevölkerung abgelehnt worden war, wurde das finale Abkommen⁴⁰ vom 24.11.2016 nach einer Überarbeitung, in die die Kritik oppositioneller Institutionen einfluss, Ende November verabschiedet.

Die verschiedenen interdisziplinären Beiträge, die dieser Tagungsbericht zusammenfasst, stellen teilweise gegensätzliche Anschauungen dar. Als gesellschaftspolitische Reaktionen und akademische Interpretationen leisten sie einerseits aus philosophischer, historischer, juridischer und politischer Perspektive Aufklärung über den kolumbianischen Prozess der Friedensfindung mit Hilfe der Übergangsjustiz und reflektieren andererseits den Diskurs der sozial und politisch gespaltenen kolumbianischen Bevölkerung.

³⁹ Gonzalo Sánchez (2013): ¡BASTA YA! Colombia: memories of war and dignity. General Report by the Historical Memory Group Online, 436 S., abrufbar unter: <http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2016/basta-ya-ingles/BASTA-YA-ingles.pdf> (Stand 20.02.2017).

⁴⁰ Das finale Abkommen vom 24.11.2016 ist online abrufbar unter: <https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf> (Stand 20.02.2017).

1. Analyse des Plebiszits und die Konstitutionalität der Übergangsjustiz (01.09.2016)

Die inhaltlichen Schwerpunkte des ersten Forums am 1. September 2016 zeigten sich in sechs akademischen Beiträgen und Debatten, die folgende Frage in den Mittelpunkt stellten: „Was sollen die kolumbianischen BürgerInnen über das am 02. Oktober 2016 stattfindende Plebiszit und die ihm zugrunde liegende Konstitutionalität der kolumbianischen Übergangsjustiz wissen?“ Die Frage nach der praktischen Ausgestaltung des Friedens findet in den Vereinbarungen von La Habana eine erste politische und juristische Antwort und zielt auf eine Politik der Wahrheit, Versöhnung und Justiz. Die Ausgestaltung des Friedens beruht aber darüber hinaus auf der bürgerlichen Anerkennung des Abkommens, was Opferentschädigung, Weiterführung des aktuellen Friedensprozesses und Anerkennung der politischen und juristischen Institutionen bedeutet. Diese Anerkennung erfordert die Zusammenarbeit zwischen einer Politik der Wahrheit, der Justiz sowie der Aussöhnung der Beteiligten durch die aktive Beteiligung aller Kolumbianer. Hinsichtlich der Ausgangsfrage, was die kolumbianischen BürgerInnen über das am 2. Oktober 2016 stattfindende Plebiszit wissen sollen, wurden die sozialpsychologischen, politischen und konstitutionellen Dimensionen des aktuellen Friedensprozesses und des anstehenden Plebiszits diskutiert. Allgemeiner Tenor war, dass die Entscheidung am 2. Oktober von der Fähigkeit der KolumbianerInnen abhängt, das alte und noch immer existente Freund-Feind-Schema abzulegen, um an einem aktiven Versöhnungsprozess teilzunehmen und den Frieden partizipativ auszugestalten.

1.1. Versöhnung und Wahrheit in der Absicht des Plebiszits und der Übergangsjustiz

*Miguel Umberto Jaime*⁴¹ stellte einige Thesen auf über das Verhältnis der Versöhnung und der Wahrheit als kritische Werte, die die kolumbianische Gesellschaft im Zusammenhang mit dem anstehenden Referendum und dem Modell der Übergangsjustiz in Kolumbien einfordern müsse.

Erstens seien Versöhnung und Wahrheit die zentralen Werte, die die kolumbianische Gesellschaft hinsichtlich des bevorstehenden Plebiszits und der Konstruktion einer Übergangsjustiz brauche. Die Frage des Plebiszits könne als Chance gesehen werden in einer Gesellschaft, die historisch von den Leitmotiven der Angst und Leidenschaft geprägt ist, hin zu dem Gedanken einer kollektiven Versöhnung zu gelangen. Versöhnung aber verstehe sich als sozialer Prozess und als solcher sei sie eine dauerhafte gesellschaftliche Aufgabe. Der Ausgang des Referendums werde durch die Bereitschaft zur Versöhnung bestimmt, in einer Gesellschaft, deren Problembewältigung weniger auf einem demokratischen Pluralismus als vielmehr auf der Gewohnheit, Diskrepanzen mit Waffen zu lösen, basiere. Laut *Jaime* sei es unabdingbar, die bestehende demokratische Kultur zu verbessern. Damit einher gehe aber auch die Pflicht des Staates, interne Konflikte wie die sozioökonomischen Probleme und die ungleiche Verteilung der Wohlstandproduktion im Lande zu beenden und zwar durch eine Trennung der militärischen Lösung von der politischen.

⁴¹ Richter am Obergericht Medellín, Strafrechtskammer; Experte (*especialista*) im Strafrecht und Kriminologie der Universität von Medellín; Magister in Philosophie der Universidad del Valle (Cali).

Zweitens sei hinsichtlich der Übergangsjustiz das Vertrauen in den kolumbianischen Rechtsstaat und insbesondere in die Unabhängigkeit der Richter unabdingbar. Die in der finalen Einigung verankerten Sanktionen einer Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) seien effektiv und gerade deren geringe Strenge käme dem Wert der Wahrheit zugute. Denn retributive Gerechtigkeit bedeute, dass der Staat die Verantwortung hat, die Wahrheit zu suchen. Retributive Strafjustiz befinde sich in einer direkten aber umgekehrt proportionalen Relation zum Wert der Wahrheit, was bedeutet, dass, je höher die Härte der retributiven Strafe ausfällt, desto kleiner wird die Chance, Wahrheit zu finden. Die geringe Schwere der Sanktionen, die im finalen Abkommen festgelegt wurde, steht im Zusammenhang mit der Wahrheitsfindung. Restriktive Sanktionen der Freiheit sind am Wert der Reparation orientiert und denjenigen vorbehalten, die von Anfang an die Wahrheit detailliert und komplett zugeben.

Bezüglich des Urteils C-379 von 2016, erläuterte *Jaime* die normative Wirkung des Plebiszits in Bezug auf die Umsetzung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und der FARC-EP. Diese ergebe sich nicht nur aus der Abhängigkeit der Umsetzung des legislativen Gesetzesaktes 01 von 2016 vom Ausgang des Plebiszits, sondern auch weil das Plebiszit als Parameter die politische Legitimität des Übereinkommens zwischen der Regierung und der FARC-EP definiert.

Abschließend weist Jaime bezüglich der im Friedensabkommen vorgesehenen Sanktionen auf hin die Notwendigkeit hin zu verstehen, dass es aufgrund internationaler Vereinbarungen Delikte gebe, die ihrer rechtlichen Natur nach nicht begnadigt werden könnten. Für diese Delikte werde es Untersuchungen, Urteile und Strafen für die Mitglieder der FARC-EP geben. Trotzdem, so Jaime, sei es wichtig nicht auf das Verständnis des „anderen“ als „Gegner“ zu verzichten, um die Verhandlungen voranzutreiben.

1.2. Die Konstruktion der Politik der Angst und des Hasses: Soziopolitische Reflexionen über das Plebiszit für den Frieden

*Gabriel Ignacio Gómez*⁴² befasste sich in einer soziopolitischen Analyse einerseits mit der Problematik der kolumbianischen Kultur, die zwischen Angst und Leidenschaftlichkeit schwankt und andererseits mit der Kritik der politischen Polarisierung des Friedensprozesses seitens der opportunistischen politischen Opposition.

Die Polarisierung in der aktuellen Friedensdebatte lasse sich mit Blick auf die politische Konstruktion von Angst und Hass in Kolumbien erklären. Im kolumbianischen Fall sei die politische Praxis der Konstruktion von Angst kein Monopol eines Sektors, da sie durch den Staat, durch die bewaffneten Akteure und andere Interessensgruppen ausgeführt worden sei. Obwohl sich die aktuelle Debatte vor einem völlig veränderten sozialen und politischen Kontext abspiele, sei die Sprache des Postkonflikts und der aktuellen Friedensdebatte noch immer von der Perversität

⁴² Magister in rechtlichen Institution der University of Wisconsin-Madison; Doktor in Studien der Gerechtigkeit der staatlichen Universität Arizona und Professor an der juristischen und politikwissenschaftlichen Fakultät der UdeA sowie Forscher in der Gruppe Recht und Gesellschaft derselben Universität.

dieser Praxis⁴³ geprägt. Besonders im letzten Jahrzehnt wurde Angst als politisches Konstrukt seitens der politischen Opposition gegenüber der Regierung Santos strategisch instrumentalisiert. Diese Strategie der Erzeugung von Angst verhindere nicht nur die Transformation des Konfliktes, sondern trage auch zu unnötiger Vermengung und Gleichsetzung der Annahme des finalen Abkommens mit der generellen politischen Anerkennung der Regierung unter Santos oder der Auszeichnung der FARC-EP bei.

Die politische Polarisierung mit einer Rhetorik der Angst und des Hasses könnte das schlimmste Resultat im Zuge des bevorstehenden Plebiszites hervorrufen, nämlich eine Verlängerung des bewaffneten Konflikts. Deshalb sei es unverzichtbar, auf die Rhetorik der Angst mit einer Konstruktion von Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung zu antworten, um den Teufelskreis aus Ressentiment und Rache zu durchbrechen und eine gemeinsame Zukunft zu entwickeln. Obgleich es legitime Befürchtungen und strittige Punkte besonders hinsichtlich der Freiheitsstrafen gebe, liege die zentrale Rolle des aktuellen Abkommens in der Aufmerksamkeit, die es den Rechten der Opfer hinsichtlich Reparationen, Garantie auf Nicht-Wiederholung und Aufklärung der Wahrheit schenke. Gómez betont daher auch, dass die Ablehnung des finalen Abkommens aufgrund fehlender starker retributiver Komponenten eine historische Pflichtvergessenheit gegenüber der kolumbianischen Gesellschaft und gegenüber den Opfern der Vergangenheit und der Zukunft darstelle.

1.3. Das Plebiszit für den Frieden

Bernardita Pérez⁴⁴ widmete sich vor dem Hintergrund des fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Verfassung dem Plebiszit bzw. dem Referendum⁴⁵ für den Frieden und den sich aus der Konstitution ergebenden Mechanismen der bürgerlichen Partizipation. Sie verdeutlichte erstens, dass das Plebiszit stattfinden werde, weil es als bürgerliches Referendum am Verhandlungstisch zwischen Regierung und FARC-EP im August 2012 beschlossen wurde. Es werde zweitens ein Plebiszit geben, weil dieses dem Abkommen seine demokratische Legitimität geben solle. Das

⁴³ Die aktuelle Fraktion der Plebiszit-Gegner und Uribe-Anhänger folgt einem politischen Leitgedanken, den Álvaro Uribe Vélez in seiner Präsidentschaft unter der Idee der terroristischen Bedrohung (*amenaza terrorista*) und der Konstruktion von Freund- und Feindbildern etablierte. Diese Bedrohungskulisse stellte sich in einer diametralen Konstruktion des absoluten Feindes im Gewand der Terroristen, die man nur mit Waffen besiegen könne, gegenüber des pro-systemischen Feindes im Gewand des Paramilitärs, durch deren Hilfe die Regierung dieses Ziel erreichen könne, dar.

⁴⁴ Rechtsanwältin und Expertin in Rechtsphilosophie der Universidad Castilla de Mancha; Professorin an der juristischen Fakultät der UdeA; Mitrichterin am KVerfG und Obergericht Medellín.

⁴⁵ Pérez unterscheidet in ihrer Ansprache im Spanischen zwischen verschiedenen Mechanismen der bürgerlichen Partizipation. Hierbei wies sie auf den Unterschied zwischen Plebiszit (*plebiscito*) und Referendum (*referendo*) hin. Während die deutsche Presselandschaft das kolumbianische Plebiszit oft als Referendum betitelte, verdeutlichte Pérez, dass das Referendum im Sinne des spanischen *referendo* in der politischen Theorie geschichtlich gesehen eine bessere Herkunft als das Plebiszit (*plebiscito*), das als politische Abstimmungspraxis von Entscheidungen, die durch autoritäre der diktatorische Regime getroffen wurden, habe. Die etymologische Bedeutung des Wortes Plebiszit im Deutschen wie im Spanischen verweist auf den zugrundeliegenden gemeinsamen Charakter, dass es sich dabei um eine Abstimmung des Volkes handelt, um eine Entscheidung der Executive zu ratifizieren.

plebiszitäre Referendum sei durch das Verfassungsgericht im Urteil C-379 im Jahr 2016⁴⁶ verbürgt. In diesem Urteil legt das Gericht aber nicht nur die demokratische Verbindlichkeit der plebiszitären Entscheidung gegenüber dem Präsidenten der Republik fest, sondern vertieft darüber hinaus die Doktrin über die Konstitutionalität der Übergangsjustiz. Die Konstitution sage, so *Pérez* Auslegung, aber nichts darüber aus, wie ein Friede konkret zu erreichen sei, da dieser nicht normativ regulierbar sei. Sie lege lediglich Mechanismen der bürgerlichen Partizipation wie Plebiszit oder Referendum fest. Obwohl es streng genommen keine Ratifizierung des Abkommens geben könne, da diese eine Pluralität der politischen Akteure voraussetze, werde es ein Plebiszit geben, da es sehr einfach anzuwenden und zugleich bindend ist, um den Exekutiventscheidungen des Präsidenten demokratische Legitimität zu verschaffen.

Weiterhin werde im Plebiszit nicht der Friede zur Diskussion gestellt, sondern lediglich die finale Version des Abkommens, denn es sei nicht möglich, nach dem Frieden zu fragen, da der Friede in der Verfassung als Grundrecht festgeschrieben sei. Das Plebiszit repräsentiere in seiner politischen und symbolischen Bedeutung nicht den Frieden, sondern drücke vielmehr die Entwicklung bestimmter Friedensprozesse auf dem Weg zu einem stabilen und anhaltenden Frieden aus. *Pérez* fasste zusammen, dass das Plebiszit ein Akt für die gesamte kolumbianische Bevölkerung sei. Darüber hinaus sei es das einzige politische Abkommen seit der Republikgründung 1991, das nicht nur auf einem Amnestie-Angebot beruhe, sondern darüber hinaus Prinzipien wie Wahrheit und Gerechtigkeit enthalte und sowohl den Opfern Reparationen wie auch eine Nicht-Wiederholung verspreche.

1.4. Krieg, Recht und Frieden

*Francisco Cortés Rodas*⁴⁷ näherte sich dem Thema des Plebiszits und der Übergangsjustiz mittels der Frage: „Was ist der Friede aus philosophiehistorischer Perspektive und was kann er für die Zukunft Kolumbiens bedeuten?“ *Rodas* stellte die These auf, dass der Friede in Kolumbien durch das normative Modell „Friede mittels Recht“ (*paz por medio del derecho*) interpretiert werden könne. Die fundamentalen Ideen dieses normativ-politischen Paradigmas würden in den fünf Punkten des finalen Abkommens konkretisiert und deshalb sei dieses Abkommen das vorrechtliche Fundament für eine neue politische Ordnung, die an Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit orientiert sei. Die Abkommen definierten minimale Konditionen eines Friedens mittels des Rechtes. Interpretiere man das normativ-politische Paradigma „Friede mittels Recht“ in Disjunktiven, so stelle nach den Worten *Noberto Bobbíos* (1997) Krieg als organisierte Gewalt einer Gruppe die Gegenfolie zur Anwendung des Rechts für den organisierten Frieden einer Gruppe dar. Im klassischen Sinne sei der Vertrag zwischen der Bürgerschaft, die den Krieg aller gegen alle im Naturzustand abzuschaffen sucht, der Übergang zu einem Staat in Freiheit und Recht vor dem Hintergrund des Friedens. Analog dazu stehe das Disjunktiv des „Ja, das den Frieden

⁴⁶ KVerfG, Urteil C-379/16 vom 18.07.2016, Berichterstatter Luis Ernesto Vargas Silva. Online abrufbar unter: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-379-16.htm> (Stand 20.02.2017).

⁴⁷ Professor in Philosophie der UdeA und Direktor des Instituts für Philosophie der selbigen Universität. Doktor in Philosophie an der Universität Konstanz; Magister in Philosophie an der Universidad Nacional de Colombia (Bogotá).

darstelle, gegenüber dem Nein, das den Krieg darstellt“ („*El Si es la paz- el No es la guerra*“). „Der Friede mittels Recht“ sei deshalb nicht utopisch, weil er das Ziel anstrebe, den internen Konflikt bzw. seine militärische Regulierung zu beenden, und dass die FARC-EP durch die Implementierung des finalen Abkommens faktisch zum entwaffneten politischen Akteur werden.

Darüber hinaus liefere das finale Abkommen die Möglichkeit auf Frieden in doppelter Hinsicht. Es verkörpere sowohl die Ideen des negativen als auch des positiven Friedens, da es einerseits auf die Abwesenheit von Krieg und Gewalt setze und andererseits ein höheres Niveau sozialer Gerechtigkeit anstrebe. Die Unterzeichnung des Abkommens, verstanden als die Beendigung des bewaffneten Konfliktes, stelle den negativen Frieden dar. Sie sei deshalb aber auch nur ein Schritt, auf welchen im Sinne des positiven Friedens weitere Schritte folgen müssten, wie Programme zur Linderung der ökonomischen und sozialen Probleme hinsichtlich Subsistenz, Gesundheit, Bildung und Arbeit für die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Abschließend verweist *Cortés Rodas* darauf, dass die Bedeutung des anstehenden Plebiszits in der politischen Geste liege, dem kolumbianischen Volk das letzte Wort zu geben und es als ersten Gesetzgeber im Sinne der Verfassung von 1991 anzuerkennen. Deshalb stelle das Plebiszit auch ein fundamentales Moment in der Geschichte der demokratischen Formation Kolumbiens dar.

1.5. Das Abkommen zwischen Regierung und FARC-EP über die „Suche, Identifikation und würdevolle Einhändigung der Überreste der verschwundenen Personen im bewaffneten Konflikt“

*Gloria María Gallego*⁴⁸ präsentierte die Ergebnisse ihrer Studie⁴⁹ zum Abkommen zwischen der Regierung und FARC-EP über die „Suche, Identifikation und würdevolle Einhändigung der Überreste der verschwundenen Personen im bewaffneten Konflikt“⁵⁰ und stellte die These auf, dass die Verhandlungsprozesse von Havanna und die Abkommen aus humanitärer Perspektive eine großartige Errungenschaft hinsichtlich der Berücksichtigung der Opfer des Konfliktes darstellten. Sie stellte einige Ergebnisse ihrer Studie zum ersten Punkt⁵¹ des Abkommens vor und analysierte dessen moralisches, politisches und rechtliches Fundament, das auf den Normen des internationalen humanitären Völkerrechtes beruht. Durch dieses Fundament würden die Beteiligten

⁴⁸ Doktor in Rechtswissenschaften der Universidad Zaragoza und Direktorin der Abteilung für Rechtstheorie der Universität Eafit (Medellín).

⁴⁹ Vgl. Gallego, Gloria María, „El Acuerdo Gobierno – FARC sobre búsqueda, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas. Análisis político y jurídico“, in *Revista Estudios del Derecho* 72 (160), Medellín, UdeA, S. 105-141.

⁵⁰ Mitteilung Nr. 62. La Habana, vom 17. Oktober 2015. „*El Acuerdo sobre la búsqueda, ubicación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en relación con el conflicto armado*“. Online abrufbar unter: <https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-62-la-habana-17-de-octubre-de-2015> (Stand: 20.02.2017).

⁵¹ Das Abkommen umfasst zwei Punkte: Der erste Punkt befasst sich mit dem Kompromiss zwischen der kolumbianischen Regierung und FARC-EP, der die Regierung dazu verpflichtet die Identifikation der in der Schlacht getöteten Guerillakämpfer und der Begrabenen N.N. zu beschleunigen sowie die FARC-EP dazu verpflichtet, alle Informationen über die Menschen, die in ihrer Gewalt gestorben sind, auszuhändigen. Der zweite Punkt beschließt eine Gründung einer speziellen Einheit mit humanitärem und außergerichtlichem Charakter zur Suche und Identifikation der Verschwundenen im bewaffneten Konflikt.

des internen bewaffneten Konfliktes rechtlich dazu verpflichtet, nach den Toten zu suchen, diese zu identifizieren sowie ihre Überreste würdig beizusetzen und die Familien der Verschwundenen über Aufenthaltsort und Schicksal der Vermissten zu informieren.

Gallego problematisierte die Argumente der politischen Opposition, die das finale Abkommen mit der Begründung ablehnt, dass ihm ein starker retributiver Aspekt fehle. Ihrer Meinung nach setze die Opposition damit nicht nur ein Ende des bewaffneten Konflikts aufs Spiel, sondern ignoriere vielmehr die Rolle der Opfer und Opferentschädigung. Gerade die Opfer, deren Familien so lange in Unklarheit über den Verbleib ihrer verschwundenen Angehörigen waren, würden durch die in den Vereinbarungen festgelegte Pflicht zur Suche, Identifikation und Aushändigung der Überreste der verschwundenen Personen gewürdigt. Darüber hinaus stellten die Abkommen eine offizielle Antwort des kolumbianischen Staates auf die Verbrechen an Millionen verschwundener Menschen dar, welche bisher negiert wurden.

1.6. Frieden oder Beendigung des Konfliktes – wofür stehen wir?

*John Zuluaga*⁵² analysierte das Urteil C-379 aus dem Jahre 2016⁵³ und kritisierte die darin enthaltene Doktrin des Verfassungsgerichts als formalistisch. Erstens zeige sich dieser Formalismus in der Verknüpfung der Beendigung des Konflikts mit der Unterschrift des Abkommens zwischen Regierung und FARC-EP und zweitens in der Auslegung des Gerichts zur demokratischen Legitimität der Übergangsjustiz und deren Konstitutionalität durch das plebiszitäre Referendum.

Einerseits gebe das Urteil C-579 aus dem Jahre 2013 die verfassungsrechtliche Konformität der Suche nach einem stabilen und anhaltenden Frieden als teleologischer Parameter durch die Applikation von klassischen Prinzipien der Übergangsjustiz vor. Durch die Reform des Rechtsakts 01 aus dem Jahre 2012 wurde die Beendigung des Konflikts als Durchbrechung des Teufelskreises des Gewaltregresses zur Abwicklung der sozialen Differenzen definiert. Das KVerfG setze aber im Urteil C-379 aus dem Jahr 2016 die Beendigung des Konfliktes mit der Unterzeichnung des Abkommens formal gleich. Das materiale Kriterium definiert Beginn oder Beendigung eines nichtinternationalen Konflikts in der realen Form des Konfliktes und der realen Beendigung der Feindseligkeiten. Dieses bleibe aber durch das ausschließlich formale Kriterium der Unterzeichnung des Abkommens unberührt.

Andererseits sei die Bestimmung des plebiszitären Referendums als ein Medium zur demokratischen Legitimität der Übergangsjustiz formalistisch. Dieser Formalismus zeigt sich in der Gleichsetzung des Plebiszits im Sinne einer sozialen Diskussion mit der demokratischen Legitimation der Übergangsjustiz. Die demokratische Legitimität, die auf einer sozialen Diskussion beruhe, könne aber nicht einfach auf das Plebiszit reduziert werden, da sie eine aktive Einbeziehung der Opfer an der Ausgestaltung und eine Implementierung der judiziellen und nicht-judiziellen Mechanismen der Übergangsjustiz verlange. Durch die Formalisierung des Gerichts werde die positive und aktive Partizipation der Opfer, die durch die UNO bei der Implementation

⁵² Siehe *infra* Autoren; für mehr Info zum Autor siehe www.john-zuluaga.de.

⁵³ KVerfG, Urteil C-379 de 2016, *supra* Fn. 46, Abschn. „Consideraciones de la Corte“.

der Mittel zur Gerechtigkeit vorgesehen ist, auf eine Ja/Nein-Abstimmung im Plebiszit reduziert. Das Plebiszit sei jedoch lediglich ein Mechanismus zur Verstärkung der demokratischen Legitimation.

Zuluaga schließt aus diesen Gründen, dass das KVerfG die Diskussion über das *Wie* und *Wann* der Beendigung des Konfliktes verschiebt und stattdessen das finale Abkommen über den Frieden als formales Kriterium zur Beendigung des Konfliktes auslegt. Eine formal auf das Plebiszit reduzierte Legitimation der Übergangsjustiz reiche nicht aus und es bedürfe der aktiven Intervention der Opfer für das Design und die Implementierung der judiziellen und nicht-judiziellen Mechanismen der Übergangsjustiz.

1.7. Fazit zum ersten Forum

Die Frage nach der praktischen Ausgestaltung des Friedens findet in den Friedensabkommen von Havanna eine erste politische und rechtliche Antwort, die an eine Politik der Wahrheit, Versöhnung und Gerechtigkeit orientiert ist. Darüber hinaus gründet sich die Ausgestaltung des Friedens auf der Anerkennung des finalen Abkommens durch die Bürgerschaft. Diese Anerkennung erfordert sowohl die Integration einer Politik zur Schaffung von Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung als auch die aktive Beteiligung aller Kolumbianer. Vor der plebiszitären Entscheidung, die am zweiten Oktober 2016 erwartet wurde, befasste sich das erste Forum mit den psychosozialen, politischen und verfassungsrechtlichen Dimensionen des Friedensprozesses zwischen der Regierung und der FARC-EP. Die Ansicht, dass die plebiszitäre Entscheidung vom zweiten Oktober 2016 von der Fähigkeit der Kolumbianer abhängt, das alte und immer noch aktuelle "Freund-Feind-Schema" zu überwinden, um in einen aktiven Prozess der Versöhnung einzutreten und zu einer partizipativeren Ausgestaltung des Friedens zu gelangen, stellte einen gemeinsamen Nenner dar.

2. Perspektiven der Übergangsjustiz in Kolumbien (05.10.2016)

Vor dem Hintergrund des gescheiterten Plebiszits am 02.10.2016 drehten sich die Debatten um die Frage der Bedeutung des gescheiterten Plebiszits sowie um die Möglichkeiten und die Bereitschaft zu Neuverhandlungen einerseits zwischen Regierung und den Kritikern des Abkommens und andererseits zwischen Regierung und FARC-EP. Einzelne Beiträge befassten sich mit Lösungsmöglichkeiten und den Herausforderungen nach dem Plebiszit hinsichtlich der Implementation des Modells der Übergangsjustiz, das in den Abkommen zur Beendigung des Konfliktes und der Konstruktion eines stabilen und dauerhaften Friedens definiert ist.

2.1. Die Übergangsjustiz und die Zurückgewinnung der politischen Kultur in Kolumbien

Jorge Alberto Giraldo Ramírez⁵⁴ stellte fünf Thesen zur Übergangsjustiz in Kolumbien vor: Erstens stelle die Übergangsjustiz eine *politische Gerechtigkeit* dar. In diesem Sinne seien die substantiellen Terme der Übergangsjustiz solche, die die politische Gemeinschaft als Abkommen bestimmen könnten. Es gebe keinen äußeren oder transzendentalen Parameter zur Kodifizierung dessen, was die Übergangsjustiz sei. Vor diesem Hintergrund zeige auch das gescheiterte Plebiszit, dass das Abkommen als Friedensabkommen nur einen partiellen Frieden definiere.

Zweitens sei die Übergangsjustiz als *Mittel der Transition nationalstaatlicher Zustände* wie z.B. von einem autoritären Regime oder Krieg zu einer Demokratie oder zum Frieden zu verstehen. Dies bedeute, dass sie als Maß der Möglichkeit des Friedens konstruiert werden müsse. In dieser Hinsicht sei die Übergangsjustiz eine künstliche oder instrumentelle Justiz, da sie am Maß des Konfliktes ausgerichtet sei.

Drittens sei die Übergangsjustiz als ein *Mittel der Transition von Akteuren* zu verstehen. Durch die Übergangsjustiz werde sozialen Agenten die Transition von Staatsfeinden zu Bürgern ermöglicht. Auch hier sei sie dem Maß des Zieles entsprechend konstruiert, also instrumentell.

Viertens sei die Übergangsjustiz ein *Konstrukt*. Dies sei die am schwersten akzeptierbare Eigenschaft der Übergangsjustiz, da sie voraussetze, dass zwei ungleiche politische Akteure wie der Präsident der kolumbianischen Regierung und der Chef der Guerillaorganisation FARC-EP in der Fiktion von Gleichheit verhandeln und Abkommen schließen.

Abschließend plädierte *Giraldo* für die Zurückgewinnung der politischen Kultur Kolumbiens die durch die Rechtswissenschaft zu stark vereinnahmt sei. Im Hinblick auf das gescheiterte Plebiszit betonte er, dass die politische Kultur nicht durch einen gesetzlich beschlossenen plebiszitären Konsens erlangt werden könne, sondern durch eine „Pädagogik der Differenz“, eine „Pädagogik der Abkommen“ erzielt werden müsse.

⁵⁴ Philosoph der Universidad Santo Tomás De Aquino (Bogotá); Magister und Ph.D. in Philosophie der UdeA und Dekan der Fakultät der Humanwissenschaften der Universität EAFIT (Medellín); zum Vortrag siehe ausführlich Jorge Giraldo, „La justicia transicional es justicia política“, in Revista Debates 75 (Sep-Dez/2016), Medellín, UdeA, S. 29 ff.

2.2. Übergangsjustiz zwischen politischer Verhandlung und Konstitutionalität: Wie viel Demokratie und wie viel Gerichtsbarkeit braucht die Übergangsjustiz?

*Ana María Londoño Agudelo*⁵⁵ befasste sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Übergangsjustiz durch politische Verhandlungen in Bezug auf ihre Verfassungsrechtsmäßigkeit. Sie argumentierte, dass die zeitgenössische internationale Entwicklung der Etablierung juristischer Mechanismen zur Initiierung von Transitionsprozessen innerhalb bewaffneter Konflikte hin zu pazifisierten Demokratien eminent politische Entscheidungen mit sich bringe, die über die souveränen Staatskompetenzen hinausgingen. In einer internationalen Gemeinschaft, die durch bilaterale Instrumente die staatliche Souveränität limitiere, müssten die rechtlichen Standards, die die Opfer als Subjekt setzten, primär berücksichtigt werden. Das heißt, dass die Übergangsprozesse nicht mehr wie in der Vergangenheit ablaufen könnten. Die Opfer in den Vordergrund zu stellen, zeuge von einer internationalen Entwicklung des moralischen Bewusstseins. Das bedeute, dass von einer ethischen Position auf die Frage, wie Gesellschaften den Schmerz durch kollektive Prozesse verarbeiten können, geantwortet werde.

Londoño Agudelo fragte vor diesem Hintergrund nach der Rolle des Rechts im gesellschaftlichen Prozess der Versöhnung. Wie viel Politik und wie viel Recht müssen in die Übergangsjustiz münden? Sie entgegnet *Giraldo Ramez*,⁵⁶ dass das Recht eine kritische Position innehave. Es seien nicht alle Manifestationen politisch, nicht jedes Auftauchen des Politischen habe gleich Legitimität. Das Recht differenziere genau diese Schnittstelle zwischen dem Politischen und dem politisch Legitimen. *Londoño Agudelo* verdeutlichte, dass die Verhandlungen in Kolumbien, eine Serie von transitionalen Maßstäben orientiert an verschiedenen politischen und sozialen Punkten des kolumbianischen Konfliktes darstellten. Sie betonte, dass die Übergangsjustiz nicht darauf reduziert werden könne alternative strafrechtliche Maßstäbe zu schaffen, sondern dass sie auch Hilfe biete, den Konflikt zu verstehen. Sie exemplifizierte weiterhin die Initiation des Plebiszits als nicht eindeutig politische Entscheidung, sondern als eine politisch-judizielle, die auf der konstitutionell verankerten Institution des Rechts auf Friedens (Art. 22 CN) beruhe und auf dem Recht auf Gewaltenteilung. Deshalb lehnte *Londoño Agudelo* die These ab, dass man in den Verhandlungen in Kuba den Bürger als Konstituenten abgesetzt habe. Ebenso wenig sei die richterliche Funktion in Kolumbien aufgebrochen worden.

Abschließend fragte *Londoño Agudelo* vor dem Hintergrund des gescheiterten Plebiszits, ob und in welchem Ausmaß die Übergangsjustiz demokratischer Elemente bedürfe. Sie argumentierte, dass die demokratische Resonanz durch das Plebiszit wichtig gewesen sei und ist, da der kolumbianische Konflikt sozialstrukturelle und politische Wurzeln habe und nur durch die Beteiligung des Volkes an der Transition zu einem Frieden beendet werden könne. Die bürgerliche

⁵⁵ Rechtsanwältin und Professorin für Verfassungsrecht an der UdeA; zum Vortrag siehe ausführlich Ana María Londoño Agudelo, „Perspectivas de la justicia transicional en Colombia“, in Revista Debates 75 (Sep-Dez/2016), Medellín, UdeA, S. 23 ff.

⁵⁶ Siehe *supra* 2.1. Die Übergangsjustiz und die Zurückgewinnung der politischen Kultur in Kolumbien.

Beteiligung diene nicht nur der politischen Legitimierung, sondern letztendlich auch der gesellschaftlichen Realisierung eines Friedens.

2.3. Post-plebiszitäre Kommentare zur Implementierung der Übergangsjustiz und den konstitutionellen Veränderungen

*Rafael Nieto Loaiza*⁵⁷ befasste sich mit dem Charakter der Übergangsjustiz und der Rolle des Verfassungsgerichts vor dem Hintergrund des gescheiterten Plebiszits. Im Gegensatz zu *Ana Maria Londoño Agudelo*⁵⁸ betonte er, dass der Prozess der Implementierung der Übergangsjustiz mit enormen konstitutionellen Veränderungen verbunden sei, welche nicht nur die demokratischen Spielregeln, sondern auch die Kriterien für die Bestimmung der Richter veränderten. Er kritisierte die Planung eines Friedenstribunals, das nicht an das kolumbianische Strafgesetzbuch gebunden ist. Außerdem wandte er sich gegen die Behauptung der FARC-EP, dass das sog. Friedensabkommen den internationalen Charakter eines speziellen Abkommens besitze, weshalb es als normativer Corpus in den konstitutionellen Block der Verfassung eingehen solle und nicht veränderbar sei. *Nieto Loaiza* widersprach dieser Anschauung vehement, u.a. weil die FARC-EP als Guerillagruppe keine Subjektivität im Sinne eines Subjekts des internationalen Rechts habe.

Abschließend ging *Nieto Loaiza* auf das Plebiszit ein und auf die darauf bezogenen Deklarationen der FARC-EP, die den negativen Ausgang des Plebiszits nicht akzeptieren wolle. Er hält die Position der FARC-EP für juristisch eigenartig, undemokratisch und politisch falsch. Er unterstrich, dass das gescheiterte Plebiszit eine Chance historischen Charakters biete, Wiederverhandlungen aufzunehmen und die Gesamtbevölkerung an der Debatte über das Abkommen teilhaben zu lassen. Der Präsident stehe nun in der Verantwortung, neue Verhandlungen mit der Opposition anzustoßen, um zu einem Konsens zu gelangen. Die aktuelle politische Debatte sei durch Anschuldigungen der Opposition und der Nein-Stimmer beim Plebiszit gekennzeichnet, was zu kritisieren sei. *Nieto Loaiza* warnte davor, die Anhänger der Opposition wie die Täter des Konfliktes zu diskreditieren.

2.4. Die post-plebiszitäre Notwendigkeit der Konsensfindung in einem homogenisierten und exklusiven Diskurs der Ablehnung

*Dario Acevedo Carmona*⁵⁹ kommentierte zunächst den Ausgang des gescheiterten Plebiszits vom 02.10.2016 und betonte, dass dieser mindestens zwei Reaktionen mit sich bringe: Einerseits könne die Nein-Fraktion, die vom Ex-Präsidenten Álvaro Uribe Vélez angeführt wird die Neuverhandlungen einiger Aspekte und problematischer Punkte anstoßen, um einen großen nationalen Konsens für den Frieden zu erlangen. Andererseits habe die Regierung Santos Tage vor dem Plebiszit die Idee zurückgenommen, dass bei einem Sieg des Nein in der plebiszitären

⁵⁷ Rechtsanwalt und Experte für Verfassungsrecht und Internationales Recht. Ehemaliger Vizeminister der Justiz unter der Regierung Álvaro Uribe.

⁵⁸ Siehe *supra* 2.2. Übergangsjustiz zwischen politischer Verhandlung und Konstitutionalität: Wie viel Demokratie und wie viel Gerichtsbarkeit braucht die Übergangsjustiz?

⁵⁹ Geschichtswissenschaftler, Forscher und Essayist in Kolumbien: Doktor in Geschichtswissenschaft der Universidad de Huelva sowie Professor der Fakultät der Humanwissenschaften und Politikwissenschaftler der Universidad Nacional de Colombia (Sitz Medellín).

Abstimmung das Abkommen seine Gültigkeit verliere und die Verhandlungen zum Ende kämen. Die Regierung akzeptierte stattdessen, dass es möglich sei Reformen über das Übereingekommene auszuführen. *Acevedo Carmona* veranschaulichte einige Unzulänglichkeiten, Inkongruenzen und Missverständnisse, die in der aktuellen Debatte über die strittigen Punkte der Opposition zur Neuaushandlung des Abkommens im Raum stehen, um auf die zentrale Notwendigkeit der Konsensfindung hinzuweisen. Er sprach dabei drei zentrale Punkte an:

Erstens hob er die Dichotomie des Imaginativs der Guerilla hervor, die einerseits durch das Abkommen einen Rückhalt in der kolumbianischen Gesellschaft habe. Demgegenüber stehe andererseits die Idee der Guerilla im Gewand der Terroristen. Es gebe ein Narrativ, das die Entstehung der Guerilla mit dem Problem des ungleich verteilten Landbesitzes und den damit verbundenen sozialen Ungleichheiten in Verbindung setze. Dieses Narrativ aber sei nicht mehr als eine schlechte Maskerade des kommunistisch-politischen Projekts, da die Guerilla diesem politisch-sozialen Anspruch nie gerecht geworden sein. Die Aussage der FARC, dass der Friede und das unterzeichnete Abkommen soziale Gerechtigkeit sei, ruhe auf großem Rückhalt unter Intellektuellen und Akademikern. Diese These aber basiere auf einer Verwechslung politischer und sozialstruktureller Ursachen des Konfliktes mit seiner militärischen Entwicklung und habe einen ideologischen, politischen und nicht akademischen Charakter. Obwohl diese These Teil des Standardnarrativs zur Rechtfertigung der Existenz der Guerilla sei, könne man nicht annehmen, dass dieses auf einer offiziellen Wahrheit beruhe. Darüber hinaus könne man der FARC Guerilla nicht den gleichen Status wie dem Staat zu sprechen. Die FARC habe weder eine permanente Kontrolle noch üben sie eine Autorität über weite bewohnte Teile im Land aus. Vielmehr haben sie die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht systematisch verletzt und es fehle ihnen ein substantieller Rückhalt in der Bevölkerung.

Zweitens, betonte *Acevedo Carmona*, habe sich die Diskussion heute dergestalt verändert, dass man statt von einem Konflikt nun von Krieg spreche. Letzterer werde nach der klassischen Definition zwischen zwei Parteien unter gleichen Konditionen geführt, was die Gleichheit von Regierung und FARC-EP in den Verhandlungen voraussetze. Ein großer Teil der Bevölkerung und einiger sozialen und politischen Lager verstehe diese Analogie der definitorischen Gleichheit aber als unannehmbares Zugeständnis.

Drittens befasste sich *Acevedo Carmona* mit dem homogenisierten und exklusiven Diskurs, der durch Akademiker, Kolumnisten und Kommunikationsmedien konstruiert worden sei, und mit der aktiven Desinformation, die damit einherging. Einerseits seien Kritiker in der Debatte kaum gehört oder gefragt worden. Andererseits sei vereinfacht und verfälscht publiziert worden, dass das Plebiszit über Frieden versus Krieg abstimme und nicht etwa über das Abkommen in Havanna. Gegenüber diesem homogenisierten und exklusiven Diskurs sei der Post-Plebiszit-Diskurs von einer Sprache des Hasses geleitet. Vor diesem Hintergrund forderte *Acevedo Carmona* eine Konsensfindung zwischen der Regierung und der politischen Opposition.

Weiterhin legte *Acevedo Carmona* nahe, dass die Reaktion auf den Sieg des Nein im Plebiszit durch einige gesellschaftliche Sektoren und einige Minister der Regierung Santos dazu diene,

diejenigen, die Gewählt haben als Narren, Unwissende und Kriegshetzer zu denunzieren, um ihre eigene Niederlage zu minimieren. Vor diesem Kontext, forderte *Acevedo Carmona* die nationale Regierung dazu auf eine vernünftige Haltung anzunehmen und einen homogenen Diskurs zu generieren, um einen Konsens zu suchen und der Opposition die Möglichkeit zu geben Teilaspekte des Abkommens neu zu verhandeln. Die Möglichkeit der Neuverhandlungen zu strittigen Punkten des Abkommens beziehe sich gerade auf die Frage der Sanktionen von Gräueltaten, die politische Berechtigung des nicht-konstitutionellen Charakters des Abkommens sowie auf die Anerkennung des Drogenhandels als autonomes und internationales Delikt und nicht als politische Straftat.

Die Abänderungen des Abkommens, die aus möglichen Übereinkünften resultieren, dürften aber nicht kosmetischen Charakter, sondern müssten angesichts der Ablehnung des Plebiszits fundamentalen Charakter haben. Ebenso sollten sich politische Bewegungen etablieren, die in einer nationalen Auseinandersetzung den Weg zum Frieden gestalten. Er hob hervor, dass die Implementierung der Übergangsjustiz nicht auf der Abwesenheit von Sanktionen beruhen könne, da Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen nach internationalen Strafrecht sanktioniert werden müssen. Übergangsjustiz bestehe darin legale Vorteile zu suchen, die Sanktionen reduzieren aber dies sei nicht gleichbedeutend mit absoluter Straffreiheit. *Acevedo Carmona* schloss mit der Feststellung, dass die Versuchung der Regierung Santos dem in der Volksabstimmung zum Ausdruck gekommen Willen des Volkes nicht nachzugeben schlimme Folgen in Bezug auf das Zusammenleben der Kolumbianer haben könne. In dieser Hinsicht müsse man sich diesen extremen Gefahren stellen, wenn man wirklich einen Frieden anstreben wolle, der von einer großen Mehrheit des Landes unterstützt wird.

2.5. Voraussetzungen der Übergangsjustiz in Kolumbien

*William Fredy Pérez Toro*⁶⁰ erklärte, dass die Abkommen zwischen der Regierung und der FARC-EP ein Symbol des Übergangs *par excellence* seien. Im Gegensatz zu anderen Übergängen, habe die Sichtbarkeit und das plebiszitäre Referendum über diese Abkommen eine starke politische Polarisierung im Land generiert. In diesem Rahmen stellte *Pérez* zehn Thesen über eines der am häufigsten polemisierten und am häufigsten verfälschten Themen in der politischen Konjunktur dar: Die Übergangsjustiz.

Erstens sei die Übergangsjustiz von der traditionellen Justiz zu unterscheiden und nur von dieser Unterscheidung her sei der Begriff der Übergangsjustiz verständlich. Zweitens sei die Übergangsjustiz ein Phänomen, das logischerweise eine Ausbreitung von Ressourcen erfordere, um Normen, Kompetenzen, Beweise, Strafen und Verfahrensregeln festzulegen. Drittens sei die Übergangsjustiz ein Mechanismus der konstitutionellen und sozialen Entsperrung, welcher subversive Gruppen, die Urheber organisierter Gewalt seien, zu politisch Verantwortlichen mache. Viertens sei Übergangsjustiz *transitional*, da sie Gesellschaften, die in einem Konflikt sind, von einem kriegesischen Zustand in einen anderen Zustand überführe, in dem politische Formen und

⁶⁰ Rechtsanwalt der UdeA; Magister in Kriminologie und Professor am Institut für Politische Studien der UdeA (Medellín); zum Vortrag siehe ausführlich William Fredy Pérez Toro, „Justicia transicional derrotada“, in *Revista Debates* 75 (Sep-Dez/2016), Medellín, UdeA, S. 15 ff.

Regeln für Gruppen mit inkompatiblen Ansinnen herrschen. Fünftens verlange die Übergangsjustiz nach Verantwortungen im Übergang ohne militärische Gewalt. Sechstens sei die Übergangsjustiz resistent gegenüber der Straffreiheit, was bedeute, dass Gefängnisstrafe nur eine der möglichen Sanktionen darstelle. Siebtens könne die Übergangsjustiz nicht formalistisch gestaltet werden, da sie einer bestimmten Subjektivität bedürfe, wenn es zum Beispiel gilt, Sensibilität gegenüber menschlichem Leid zu zeigen. Achstens sei die Übergangsjustiz eine Gerechtigkeit, die weder in Texten diktiert noch durch die Natur definiert sei, sondern die in Abkommen durch Teile der Gesellschaft entwickelt werde. Neuntens sei die Übergangsjustiz durch einen integralen Mechanismus charakterisiert und garantiere im Umkreis von Menschenrechtsverletzungen Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und Nicht-Wiederholung. Zehntens verlange die Übergangsjustiz die Implementation von Abkommen zu Garantien der Sicherheit im Kampf gegen kriminelle Organisationen und zur Friedenskonstruktion. *Peréz Toro* resümierte, dass die Übergangsjustiz immer nur eine Option einer rationalen und korrekten Idee sei, die in ihrer Ausführung limitierend und korrigierend sei.

2.6. Fazit zum zweiten Forum

Der negative Ausgang der plebiszitären Abstimmung über das finale Abkommen zwischen der Regierung und der FARC-EP stellte das zentrale Thema des zweiten Forums dar. Die ausführliche Diskussion drehte sich um die Anforderungen und Konsequenzen des negativen plebiszitären Ergebnisses, das die kolumbianische Gesellschaft weitgehend gespalten zurücklässt. Die Notwendigkeit der Kompromissfindung zwischen der Regierung und der politischen Opposition galt als allgemeiner Konsens. Darüber hinaus wurde der instrumentelle und politische Charakter der Übergangsjustiz ausführlich diskutiert. Der Unterschied zwischen der Übergangsjustiz und der einfachen Strafjustiz wurde dahingehend bekräftigt, dass die erstere nicht als formalistische Justiz verständlich fassbar sei. In dieser Hinsicht wurde die offene Gerichtsbarkeit für den politischen Übergang in Kolumbien und das Ansinnen der Verrechtlichung in Begriffen des einfachen Strafrechts als Lösung dieses Konflikts hinterfragt.

3. Probleme der Strafjustiz im Friedensprozess (01.12.2016)

Das dritte Forum thematisierte die Spannung der Implementierung der Übergangsjustiz in Kolumbien zwischen den Werten der Gerechtigkeit und des Friedens, zwischen denen des Rechts und der Politik, zwischen retributiver Gerechtigkeit, die auf die Vergangenheit gerichtet ist, und restaurativer Gerechtigkeit, die auf die Zukunft gerichtet ist. Das Konzept der Übergangsjustiz setzt voraus, dass bestimmte Normen der alltäglichen Justiz für die Erreichung eines Friedens geopfert werden müssen. Das bedeutet, dass ein ausschließlich retributiver Fokus von Gerechtigkeit, ausgerichtet an der Schwere des Verbrechens und geahndet durch individuell vollzogenen Freiheitsentzug, nicht einfach übernommen werden kann. In Bezug auf die klassische Strafjustiz kann das Modell der Übergangsjustiz in Kolumbien massive Verbrechen nicht durch ein paralleles Modell der Strafverfolgung individuell und maximalistisch ahnden, sondern es bedarf anderer strafrechtlicher Sanktionen. Die vier folgenden Beiträge diskutieren die Beziehung des Modells der Übergangsjustiz und der ordentlichen Strafjustiz im kolumbianischen politischen, moralischen und rechtlichen Kontext.

3.1. Übergangsjustiz in Kolumbien: Ein Modell für den Fortbestand?

*John Zuluaga*⁶¹ legte seine kritische Analyse zur „Sondergerichtsbarkeit für den Frieden“ (JEP)⁶² im Zusammenhang mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit dar. Seine Reflexion zur Implementierung der Übergangsjustiz und deren Grenzen gehen von der Kritik an der Abgrenzung des kolumbianischen Übergangsjustizmodells durch dichotome Kategorien wie „Gefängnis – Straffreiheit“ oder „Krieg – Frieden“ aus. In Übereinstimmung mit diesen Grenzen hat das kolumbianische Übergangsjustizmodell als vorherrschendes Parameter des Übergangs ein strafendes Element festgeschrieben: die JEP.⁶³ Andererseits hob *Zuluaga* das Problem des funktionalen Charakters eines legalistisch-formalen Übergangsmodells gegenüber den Problemen der Aufarbeitung und Überwindung von massiven Menschenrechtsverletzungen hervor. Die Tradition des legalistischen Ethos⁶⁴ bleibe im kolumbianischen legalistischen Modell der Übergangsjustiz bestehen und verhindere so eine Entwicklung von nicht gerichtlichen

⁶¹ Siehe *infra* Autoren; für mehr Info zum Autor vgl. www.john-zuluaga.de.

⁶² Die JEP ist Teil eines integralen Systems der Wahrheit, Reparation, Nicht- Wiederholung und Gerechtigkeit (SIVJNRN). Nach dem Abkommen zwischen der Regierung und der FARC-EP, stellt die JEP eine Sondergerichtsbarkeit dar, die die judizielle Funktionen autonom ausübt. Generell beruft sich die JEP auf die Möglichkeit grobe Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen und zu beurteilen und sie wird auf alle, die direkt oder indirekt in den Konflikt beteiligt sind angewendet.

⁶³ Hiervon zeugt der Fakt, dass die Wiederverhandlung nach dem Plebiszit sich fundamental im Rahmen der an der JEP orientierten Parameter abspielte.

⁶⁴ Die Konzeption der aktuellen Mechanismen der kolumbianischen Übergangsjustiz sind an einem legalistischen Ethos orientiert, das sich historisch vor dem Hintergrund verschiedener Verhandlungs- und Demobilisierungsprozesse (Paramilitär) herausgebildet hat und auf eine Form von strafender Gerichtsbarkeit als Antwort auf Menschenrechtsverbrechen, Verbrechen des internationalen humanitären Rechts und internationales Strafrecht beruht. Das *legalistische Ethos*, das die Entwicklung der Mechanismen der kolumbianischen Übergangsjustiz bedingt hat, konstituierte den Strafprozess als eine vorherrschende Form zur Realisierung seine essentiellen Absichten. Sowohl im LJP, wie im „Gesetz für die Opfer“ (*ley de la victimas*), im MJP und in der JEP wurden judizielle Komponenten und spezielle Strafen eingeführt, die nicht nur die Forderungen der Justiz, sondern auch die der Wahrheit zu lösen suchen.

Mechanismen der Übergangsjustiz trotz ihrer Ausgestaltung als ein integrales System von Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und Nicht-Wiederholung.

Zuluaga erläuterte, dass die Verrechtlichung der Lösung des bewaffneten Konfliktes eine funktionelle Anpassung an die politischen Notwendigkeiten bedeute. Die strafende Tendenz des juristischen Modells der kolumbianischen Übergangsjustiz priorisiere eine instrumentalisierte, selektive und ungleiche Anwendung des Strafrechts. Die JEP setze den Strafprozess als Bedingung für dessen Konkretisierung, ohne aber klare materiale Bedingungen für seine Realisation zu schaffen. Aber der Optimismus hinsichtlich der Anwendung des Strafrechts als Paramater der Transition übersehe laut *Zuluaga*, dass die Transition sich nicht nur ausschließlich aus legalistischen Varianten der Gerechtigkeit realisieren lasse. *Zuluaga* kam zu dem Schluss, dass das Modell der kolumbianischen Übergangsjustiz, das sich in der JEP wieder findet, kein restauratives Projekt erreiche. Es sei nämlich durch eine Überlast des juristischen Apparates, eine Bürokratisierung der Lösungen des bewaffneten Konfliktes und die antizipierte Unwirksamkeit des Systems charakterisiert. Durch eine solche Konzeption der Übergangsjustiz werde die Idee, dass der Prozess nur ein formalisiertes und begrenztes Moment zur Ausarbeitung und Definition eines Konfliktes in der Welt der Delikte darstellt, völlig verzerrt.

3.2. Veränderungen und Kontinuitäten des kolumbianischen Strafsystems im historischen Wandel

*Julio González Zapata*⁶⁵ analysierte das kolumbianische Strafsystem, um seine These von der Notwendigkeit einer Veränderung dieses Strafsystems zugunsten einer dauerhaften Friedenskonstruktion im Postkonflikt zu verdeutlichen. Nur wenn eine Überarbeitung des Strafsystems zur Garantie der Nicht-Wiederholung beitrage, könne das Risiko eines Zustands sozialer Konflikthaftigkeit und einer durch neue Gewalt gekennzeichneten Gesellschaft umgangen werden. Historisch gesehen gebe es eine Tendenz, das Strafsystem als Instrument gegen die subversiven Gruppen im kolumbianischen Konflikt anzuwenden. Diese Tradition beruhe auf der Annahme, dass jegliche politische, soziale und ökonomische Konflikthaftigkeit sich auf ein Problem der politischen Ordnung reduzieren lasse und militärisch oder gesetzlich durch die „Ausrufung des Ausnahmezustands“ beheben lasse. *González Zapata* verwies auf die Rolle der Strafjustiz in Kolumbien während des Konfliktes und deren Wandel vom Ausnahmezustand mit der Anwendung eines speziellen, sich von den ursprünglichen Strafprinzipien unterscheidenden Strafrechts „gegenüber dem Feind“ hin zum Rechtsstaat, in dem immer noch Derivate des Ausnahmezustands bestehen. Die Kontinuität, die zwischen der militärischen Strafjustiz, der Justiz der Jurisdiktion der öffentlichen Ordnung und der speziellen Jurisdiktion bestehe, sei relevant, wenn es darum geht, neue Antworten auf die Frage des Strafens zu geben. Außerdem erforderten die internationalen Verträge die Ausgestaltung eines anderen Strafsystems sowie die Berücksichtigung der aktuellen juristischen Erkenntnisse des Strafens. Durch die neuen Tendenzen werde der Sicherheitspolitik und der Rolle der Opfer eine Zentralität zugesprochen. Aber, so *González Zapata*, würden die Interessen der Opfer selten wirklich berücksichtigt. Stattdessen gebe

⁶⁵ Professor an der juristischen Fakultät der UdeA (Medellín); zum Vortrag siehe ausführlich Julio González, „La justicia penal en el posconflicto“, in *Revista Debates* 75 (Sep-Dez/2016), Medellín, UdeA, S. 7 ff.

es eine Tendenz, diese zu instrumentalisieren, um die Legitimität des neuen Strafregimes zu bestärken.

González Zapata erläuterte, dass die ordentliche Justiz ein Instrument sei, um die Verantwortung einzelner Personen an einem Delikt festzuschreiben. Die Übergangsjustiz hingegen sei ein Mechanismus, durch den die Gesellschaft versuche, Konflikte, die auf massiven Menschenrechtsverletzungen beruhen, durch die Versöhnung der gesamten Gesellschaft zu lösen. Der Konflikt werde als etwas Kollektives gesehen, auf das es kollektive Antworten gebe in Form von institutionellen Reformen, der Etablierung der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Wiedergutmachung und Nicht-Wiederholung. Es sei notwendig, die Grenzen zwischen ordentliche Justiz und Übergangsjustiz zu definieren. Um Kohärenz in der Kriminalpolitik zu garantieren sei es notwendig das Kriminalsystem komplett zu reformieren.

3.3. Die Rolle von Moral im kolumbianischen Konflikt und im aktuellen Prozess zum Frieden: Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung und Nicht-Wiederholung

Die Philosophin *Beatriz Restrepo Gallego*⁶⁶ ging aus moralphilosophischer Sicht auf den Stellenwert der Gerechtigkeit im kolumbianischen Konflikt ein. Sie postulierte, dass in der momentanen Situation des Konfliktes der moralische Aspekt von fundamentaler Bedeutung sei. Der zentrale Inhalt ihres Vortrags drehte sich um die Bestimmung eines angemessenen Modells von Gerechtigkeit, um den kolumbianischen Konflikt als fundamentales moralisches Anliegen zu verstehen. Ausgehend von der Ethik des letzten Jahrhunderts und deren paradigmatischer Wende im Zuge der erschütternden Erfahrungen des Holocausts spannte sie einen Bogen von den moralphilosophischen Paradigmen des aristotelischen Glücks und der kantischen moralischen Pflicht hin zu dem moralischen Paradigma der Orientierung am anderen menschlichen Sein unter einer Ethik des Mitleids oder Mitgefühls.

Der Waffenstillstand und die Vereinbarungen von Havanna würden einerseits über die fehlende Klarheit hinwegtäuschen, wer die Opfer des Konfliktes sind und was ihre Geschichte ist, und andererseits darüber, welche legislativen, rechtlichen und privaten Interessen hinter dem Konflikt und den Vereinbarungen ständen. Die Abwesenheit des menschlichen Seins (identifiziert im Gewand der Opfer) zeichne das Fehlen der Auseinandersetzung mit der moralischen Dimension des Konfliktes aus. Die politische Organisation der heutigen Opferbewegung zeuge von der Absenz des Staates als politischer Akteur und verdeutliche die immense Rolle dieser Opfer im Kampf um ihre Rechte. Der aktuelle Prozess habe zwei zentrale Dimensionen, die moralische und die politische.

Die Großzügigkeit, das Mitgefühl und die Solidarität der Opfer mit ihren Mitbürgern müssten nach *Restrepo Gallego* konfrontiert werden mit dem Verhalten des Weghörens und Wegsehens vieler Kolumbianer sowie mit der offensichtlichen Unterlassung, moralische Verantwortung zu

⁶⁶ Ex-Dekanin der Fakultät der sozial- und Geisteswissenschaften der UdeA (Medellín) und Mitglied des *Centro de Fe y Culturas*. B.A. in Philosophie der Manhattanville College, N.Y. University, New York, EUA und M.A. in Philosophie und Geisteswissenschaften der Fakultät Philosophie und Geisteswissenschaften an der Universidad Central de Madrid. Spezialisierung in Ethik an der Universidad Católica de Lovaina la Nueva, Bélgica.

übernehmen. Die Ignoranz gegenüber dem Leid der Opfer und damit die Entmenschlichung des Konfliktes sei das eigentliche moralische Problem im aktuellen Prozess. Neben dieser moralischen Dimension stehe die politische. *Restrepo Gallego* schloss mit der Ansicht, dass die Übergangsjustiz eine Form sowohl von Justiz als auch von Gerechtigkeit sei, die dieser Prozess benötigt, da sie im Gegensatz zu der ordentlichen Gerichtsbarkeit die Opfer in den Vordergrund stellt und nicht die Täter.

3.4. Die strafende Übergangsjustiz und der Gedanke an Vergeltung

*Armando Luis Calle Calderón*⁶⁷ stellte die These auf, dass die ordentliche Strafjustiz einen immensen Schaden am System der Übergangsjustiz und den Rechten der Opfer, die diese Gerichtsbarkeit zu garantieren sucht, ausrichten könne. Ausgehend von dem in der Moderne entstandenen Projekt des Friedens und der Idee des Rechtsstaats berief er sich auf Immanuel Kants Vorstellung von Frieden als Kondition, ohne die eine republikanische Verfassung, die auf dem Prinzip der Freiheit, der Unabhängigkeit und der Gleichheit beruhe, nicht bestehen könne. Die kolumbianische Konstitution von 1991 entspreche dem pazifistischen Projekt der Moderne in politischer, philosophischer, juristischer und kultureller Hinsicht. Der Friede sei in dieser Verfassung dreifach festgeschrieben, als Wert, als Grundrecht und als konstitutionelle Pflicht. *Calle Calderón* verwies darauf, dass die Kolumbianer in den letzten 25 Jahre mit dieser modernen Demokratie gelebt hätten, die gängige Strafpraxis Kolumbiens aber unfähig gewesen sei die verfassungsmäßig festgeschriebenen Prinzipien vor dem Hintergrund des Konflikts und des Sterbens und Verschwindenlassens vieler Menschen zu realisieren.

Calle Calderón hielt es für äußerst dringlich diese konfliktive Stimmung zu überwinden, um die Konstruktion des Friedens zu beginnen. Es werde keinen echten Frieden geben, wenn derselbe nicht dafür ausreiche die funktionelle Rolle des Rechts gegenüber der Verletzung der Menschenrechte sowie gegenüber dem Strafrecht als Regierungsinstrument und seines politischen Missbrauchs zu demaskieren. Die Übergangsjustiz sei keine Strafjustiz und könne auch nicht deren Aufgabe erfüllen, da es u.a. widersinnig sei, wenn eine der zwei Konfliktparteien im Prozess der Bewältigung des Konfliktes der anderen Gefängnisstrafe androhe. Die kolumbianische Übergangsjustiz sei bestimmt durch die Vorgaben des internationalen Gerichtshofs der Menschenrechte, des interamerikanischen Gerichts sowie die der UNO und damit einer Amnestiepraxis verpflichtet, um Feindseligkeiten in einem bewaffneten Konflikt nicht-internationalen Charakters einzustellen und zum Frieden zurückzukehren. Eine retributive Praxis in Form von Gefängnisstrafen schüre Rachedgedanken. Das Abkommen zwischen Regierung und FARC-EP beruhe auf einer strafenden Übergangsjustiz und deshalb bestehe die Gefahr, dass man keine generelle Reform des Strafsystems erreiche, die erforderlich sei, um die strafende Last, unter der das System aktuell leidet, zu reduzieren.

3.5. Fazit zum dritten Forum

Jenseits all der Fragen zum kolumbianischen Modell der Übergangsjustiz und seiner Kapazität, die geplanten Ziele zu erreichen, wurden im dritten Forum die Einrahmung des besagten Modells in

⁶⁷ Anwalt und Professor der juristischen Fakultät an der UdeA und Doktor iura der Universität Girona (Spanien).

strafrechtlichen Varianten kritisiert sowie die geringe Differenzierung hinsichtlich der einfachen Strafjustiz betont. Die punitive Betonung der Übergangsjustiz ist unzulänglich, um historische und demokratische Wechselfälle in Kolumbien zu überwinden. Die besagte Einrahmung nimmt Form an und wird am besten in der JEP mithilfe der Konstruktion eines besonderen Optimismus hinsichtlich des Gebrauches der Strafe und des Strafrechts als Parameter des Übergangs sichtbar.

4. Gesamtfazit zur Serie der Foren zum Frieden in Kolumbien

Vor dem Hintergrund der verschiedenen Experten-Meinungen der RednerInnen der „Serie der Foren für den Frieden“ der UdeA zum aktuellen Friedensprozess lässt sich resümieren, dass, so viel versprechend dieser Friedensprozess erscheint und trotz seines beträchtlichen Rückhalts im In- und im Ausland, so wage und ungewiss bleibt seine sozialpolitische Kontinuität und die Persistenz in der Praxis der Justiz des Überganges. Kolumbien – und das kann niemand bestreiten – ist besonders im Jahr 2016 viele Schritte auf dem Weg zum Frieden gegangen. Dennoch, so die Lehre der Geschichte der kolumbianischen Friedensuche und Demobilisierungsprozesse, wurde das Ende des Konflikts trotz seines Fortbestands bereits unter der Präsidentschaft von *Uribe Velez* ausgerufen⁶⁸ und die Beständigkeit einer Justiz des Überganges ohne Übergang prognostiziert. Die Entscheidung, ob der Weg zum Frieden in Kolumbien weiter auf Umwegen gegangen oder direkt und kontinuierlich erfolgen wird, hängt von vielen Dynamiken ab: von der Verwirklichung der Inhalte des finalen Abkommens in Form von Gesetzen und politischen Initiativen sowie von der Ausgestaltung und Anwendung der Übergangsjustiz, die sich im Sinne des dritten Forums trotz der Probleme als „ein Modell für den Fortbestand“ beweisen muss.

Eine kritische Frage bezüglich der Applikation der Übergangsjustiz ist, ob in Kontexten des (sozialen und politischen) Nicht-Übergangs eine analoge Übernahme von juristischen Mechanismen der Übergangsjustiz den *Übergang* effektiv herbeiführen kann. Der Ausgang des Schicksals des kolumbianischen Friedensprozesses hängt im Sinne des ersten Forums primär von der Unterstützung der kolumbianischen Bevölkerung ab. Die Notwendigkeit eines Wandels in der politischen Kultur des Landes alleine kann den zentralen paradoxen Gehalt des sozialen und bewaffneten Konfliktes in Kolumbien jedoch nicht auflösen. Nur wenn die den historischen Konflikt untermauernden sozial und politisch strukturellen Problemen der extremen Armut, der sozialen Ungleichheit und der geringen und ungleichen Partizipation zwischen BürgernInnen verschiedener sozialer und ethnischer Herkunft im Post-Konflikt aktiv und kontinuierlich angegangen werden, kann die Übergangsjustiz dem Konflikt aus seiner Sachgasse begleiten. Grund zur Hoffnung im aktuellen Friedensprozess gibt gerade die Partizipation der jüngeren Generation und der Opfer des Konfliktes an die Performativität, die Kontinuität und die Transformativität dieses Prozesses zu appellieren. In diesem Sinne wird mit dem Fortbestehen der Serie der „Foren für den Frieden“ an der UdeA am Friedensdialog festgehalten.

⁶⁸ Siehe hierzu den Artikel von Michael Reed Hurtado, in dem das Phänomen des Übergangs ohne Übergang erläutert wird. Reed Hurtado, Michael (2010): *Transitional Justice Under Fire: Five Reflections on the Colombian Case*. In: Lyons, Amanda (Hrsg.). *Contested Transitions: Dilemmas of Transitional Justice in Colombia and Comparative Experience*, ICTJ, Bogotá, S. 87-114.

Autoren

John Zuluaga LL.M. Rechtsanwalt an der Universität de Antioquia (UdeA, Kolumbien), Master of Laws (LL.M.) und Dr. iur (cand.) der Georg-August-Universität Göttingen (GAU, Deutschland). Derzeit ist er Professor am Institut für Philosophie an der Universität von Antioquia für das Feld der Übergangsjustiz und Forscher an der Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht (CEDPAL) der GAU.

Sophie Rähme, B.A.-Studentin der Soziologie und Magisterstudentin der Philosophie an der Goethe Universität (GU, Deutschland); studierte im ersten und zweiten Semester 2016 als Austauschstudentin der akademischen Kooperation der Philosophie Institute der Universität von Antioquia und der Goethe Universität im Magister Philosophie (Schwerpunkte Politische Philosophie und Sozialphilosophie).

En el ciclo de foros por la paz organizado por la Rectoría y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, con el respaldo de Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Georg-August-Universität de Göttingen, se discutieron temáticas esenciales vinculadas a los desarrollos del proceso de paz en Colombia. Desde un enfoque interdisciplinar se ofreció una reflexión histórica sobre aspectos fundamentales de este proceso y de los retos para la consolidación del proyecto de justicia transicional colombiano.

• • •

Mit der Absicht, sowohl die Entwicklungen des Friedensprozesses in Kolumbien, als auch die damit verbundenen Herausforderungen zu diskutieren, förderten das Institut für Philosophie und der Rektor der Universität von Antioquia unter Mithilfe der Forschungsstelle für lateinamerikanisches Straf- und Strafprozessrecht (CEDPAL) der Georg-August-Universität Göttingen während des zweiten Halbjahres 2016 die Realisation einer Serie der Foren für den Frieden. In dieser Reihe wurden die grundlegenden Aspekte des Friedensprozesses und die Konsolidierung des Post-Konflikts in Kolumbien diskutiert. Aus philosophischer, historischer, juridischer und politischer Perspektive leisten die hier zusammengefassten interdisziplinären Beiträge Aufklärung über den kolumbianischen Prozess der Friedensfindung mit Hilfe der Übergangsjustiz und reflektieren verschiedene gesellschaftspolitische Reaktionen innerhalb des Diskurs der sozial und politisch gespaltenen kolumbianischen Bevölkerung.



ISBN: 978-958-48-0712-0